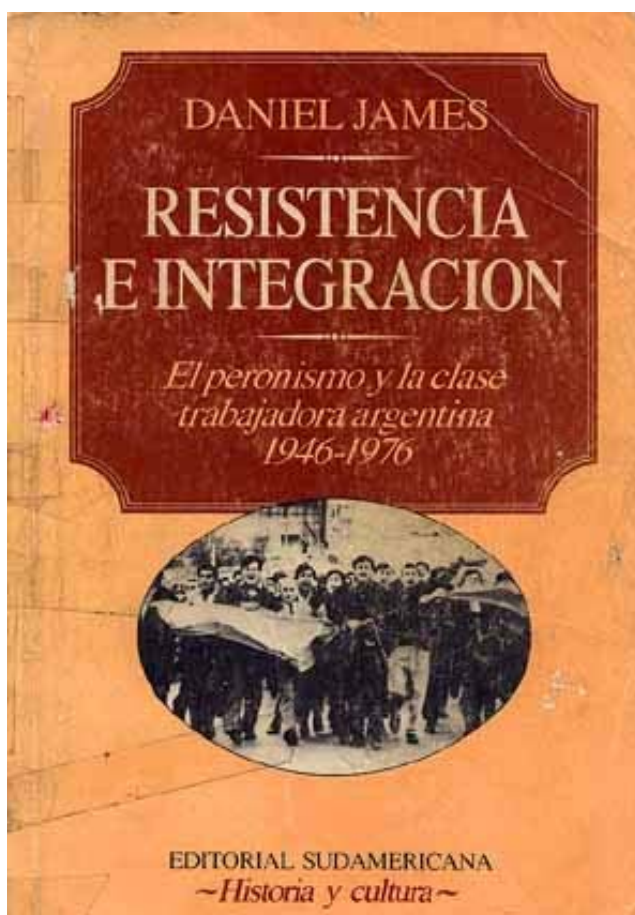


RESISTENCIA E INTEGRACIÓN

El peronismo y la clase trabajadora
argentina 1946-1976

Daniel James



Editorial Sudamericana

Colección Historia y Cultura,
dirigida por Luis Alberto Romero

EDITORIAL SUDAMERICANA

Buenos Aires, 1990

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Agradecimientos 9

Introducción 11

PRIMERA PARTE

Los antecedentes

1.El peronismo y la clase trabajadora, 1943-55 19

SEGUNDA PARTE

La resistencia peronista, 1955-58

2. Supervivencia del peronismo: la resistencia en las fábricas 69

3. Comandos y sindicatos: surgimiento del nuevo liderazgo sindical peronista 107

4. Ideología y conciencia en la resistencia peronista 128

TERCERA PARTE

Frondizi y la integración: tentación y desencanto, 1958-62

5. Resistencia y derrota: impacto sobre los dirigentes, los activistas y las bases 147

6. Corolario del pragmatismo institucional: activistas, comandos y elecciones 188

CUARTA PARTE

La era de Vandor, 1962-66

7. La burocracia sindical: poder y política en los sindicatos peronistas 219

8. Ideología y política en los sindicatos peronistas: distintas corrientes dentro del movimiento 252

QUINTA PARTE

Los trabajadores y la Revolución Argentina: de Onganía a la vuelta de Perón, 1966-73

9. Los dirigentes sindicales peronistas son asediados: nuevos actores y nuevos desafíos 287

10. Conclusión 330

Bibliografía escogida 351

2. SUPERVIVENCIA DEL PERONISMO: LA RESISTENCIA EN LAS FÁBRICAS

“La Comisión interna se presentó al Capitán Tropea, el interventor, y nos dijo que estos compañeros definitivamente no iban a volver a trabajar en el frigorífico. Esto fue a las nueve menos diez. A las nueve la fábrica se paró, 100%. Y el paro duró seis días. Y al final tuvieron que traer a los compañeros de Villa Devoto en autos oficiales y reinstalarlos en sus puestos.”

Sebastián Borro

“No sabían qué responder. Eran hijos de un gobierno paternal y el padre se había ido.”

Alberto Belloni

“Ni vencedores ni vencidos”: el interregno de Lonardi

El colapso del compromiso: Lonardi y la jefatura sindical peronista

El primer gobierno de la Revolución Libertadora, el del general Eduardo Lonardi, representó un interregno en la relación entre el movimiento sindical peronista y las autoridades no peronistas. Tras adoptar una hostil actitud inicial que llevó al secretario general de la CGT, Hugo Di Pietro, a proclamar que “cada trabajador luchará con las armas en la mano y con aquellos medios que estén a su alcance”¹, la CGT no efectuó en la práctica tentativa alguna por movilizar a los trabajadores en apoyo del régimen de Perón. Al día siguiente de su belicosa declaración, Di Pietro exhortó a los trabajadores a permanecer en calma y denunció a “algunos grupos provocadores que pretenden alterar el orden”.² La actitud de la CGT concordó con la reacción fatalista del propio Perón ante el golpe y, ante la virtual abdicación del ala política del movimiento, la CGT no demostró por cierto inclinación alguna a quedarse sola y adoptar una postura agresiva con las nuevas autoridades. Al prestar juramento Lonardi como presidente provisional el 23 de septiembre, y pronunciar un discurso inaugural de tono conciliatorio donde afirmó que no había “vencedores ni vencidos”, quedó preparado el escenario para una tentativa, de siete semanas de duración, por lograr un acercamiento entre el movimiento sindical peronista y el primer gobierno no peronista.

El 24 de septiembre la CGT respondió el discurso de Lonardi subrayando “la necesidad de mantener la más absoluta calma [...] cada trabajador en su puesto por el camino de la armonía”.³

Al día siguiente Lonardi recibió a una delegación gremial, a la que aseguró que su gobierno respetaría las medidas de justicia social logradas, así como la integridad de la CGT y las organizaciones que la formaban. La atmósfera general de benevolencia limitada se consolidó al ser designado ministro de Trabajo Luis B. Cerrutti Costa, quien hasta entonces había sido el principal asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. Uno de sus primeros actos consistió en disponer que la Dirección Nacional de Seguridad reabriera los locales gremiales clausurados u ocupados por antiperonistas. En esto residía por cierto el principal escollo para el frágil *modus vivendi* establecido.

Para fines de septiembre, los locales de los sindicatos de gráficos, ferroviarios, bancarios, petroleros y trabajadores de la carne y del vestido habían sido abandonados por los peronistas frente a los ataques de grupos antiperonistas armados. Esos grupos, conocidos como “comandos civiles”, consistían principalmente en activistas socialistas y radicales. Habían desempeñado un papel importante en la rebelión contra Perón y se consideraban como una milicia civil que serviría de garantía contra cualquier resurgimiento peronista. En ese carácter tendieron a recibir apoyo de sectores de las fuerzas armadas para los ataques a los locales sindicales. Con el fin de contrapesar la creciente presión que ejercían sobre Lonardi y Cerrutti Costa esos sectores de las fuerzas armadas que apoyaban a los comandos civiles, la CGT emitió el 3 de octubre un comunicado donde se solicitaba al gobierno poner fin a la ocupación de algunos locales gremiales por gente armada y, al mismo tiempo, se reafirmaba el deseo de la CGT de que se celebraran elecciones democráticas lo antes posible. Como paso adicional hacia la desactivación de la situación, el consejo ejecutivo de la CGT

¹ *Crítica*, 19 de septiembre de 1955.

² *Crítica*, 21 de septiembre de 1955.

³ Santiago Senén González y Juan Carlos Torre: *Ejército y sindicatos*, Buenos Aires, 1969, pág. 12.

renunció y designó en su lugar a un triunvirato provisional constituido por Andrés Framini, de los trabajadores textiles, Luis Natalini, de Luz y Fuerza, y Dante Viel, de los empleados públicos.

El 6 de octubre se publicó un acuerdo concluido entre la CGT y el gobierno, por el cual se comprometían a celebrar elecciones en todos los gremios en un lapso de 120 días y a la designación por la central obrera de interventores en todos aquellos sindicatos que se encontraban en situación irregular, principalmente los ocupados por antiperonistas. Esos interventores supervisarían el proceso electoral.⁴ En ese momento, las perspectivas de futuro entendimiento entre el gobierno y los gremios parecían promisorias. Cierta número de centrales sindicales habían retornado a manos peronistas. En el caso de los ferroviarios, sus líderes peronistas entrevistaron a Lonardi después de ser ocupada su sede central e instalada allí una jefatura antiperonista, y el presidente ordenó la devolución del sindicato a sus anteriores titulares.⁵ Además, la respuesta de los sindicatos al acuerdo del 6 de octubre sobre elecciones fue inmediata, y al día siguiente muchos de ellos anunciaron la fecha en que se efectuarían sus comicios. En la semana siguiente el número continuó en aumento, y con frecuencia el llamado a elecciones fue acompañado por otras medidas destinadas a contrarrestar el ataque antiperonista. En último término, esto involucró a menudo la renuncia de los líderes existentes. En algunos gremios los gestos fueron más allá: los dirigentes del sindicato de obreros panaderos, por ejemplo, resolvieron que todos los documentos y libros fueran puestos a disposición de quien deseara examinarlos.⁶ En el sindicato de fideeros se creó, para supervisar las elecciones, un comité constituido por diferentes tendencias políticas y cuyo fin era investigar en detalle las actividades de la dirección anterior.⁷

Los gremialistas antiperonistas no quedaron satisfechos por esas medidas. Por lo contrario, proclamaron en voz cada vez más alta sus inquietudes frente a ese proceso y resolvieron ejercer presión sobre el gobierno para que lo reviera. Esa preocupación era fácil de comprender. La animaba una oposición fundamental a toda la política del gobierno de Lonardi con los sindicatos peronistas. A su vez, esa oposición arraigaba en una actitud fundamental frente al peronismo y en determinado concepto, que analizaremos en otro lugar de este capítulo, acerca de esa corriente. Desde un punto de vista inmediato, en octubre de 1955 se oponían a la inauguración de un proceso electoral sindical que casi seguramente confirmaría el dominio de los gremios, y por lo tanto de la CGT, por los peronistas. También los alarmaba el hecho de que no obstante las muchas renuncias de dirigentes peronistas y la iniciación del proceso electoral, los comicios terminarían por quedar bajo el control general de los peronistas. Esos temores fueron acentuados por la decisión gubernamental de instalar interventores designados por la CGT en sindicatos donde había un conflicto abierto entre peronistas y no peronistas. Los sindicatos más afectados por esta política eran precisamente aquellos donde las fuerzas antiperonistas tenían mayor poder.

Durante todo el mes de octubre, los socialistas, radicales y algunos sindicalistas alzaron cada vez más la voz contra el hecho de que el Ministerio de Trabajo no intensificara la acción de la Revolución Libertadora en la esfera gremial.⁸ Por añadidura, el creciente espíritu de conciliación pareció ser subrayado por la exhortación que la CGT lanzó a los trabajadores en el sentido de que consideraran el 17 de octubre –la fecha decisiva en el calendario peronista– como un día de trabajo normal.

Sin embargo, el gobierno, y Cerrutti Costa en particular, tenían clara conciencia de los recelos que movían a los sindicalistas antiperonistas, así como de la consiguiente presión ejercida por aquellos sectores del gobierno sobre los cuales éstos influían para que se abandonara la política de conciliación.⁹ En respuesta a esa presión, el 20 de octubre el gobierno advirtió a muchos gremios peronistas, que por iniciativa propia habían puesto en marcha su proceso electoral, que antes era necesaria la aprobación de sus estatutos por el Ministerio de Trabajo. Además se produjeron varios otros ataques, siempre organizados por los comandos civiles. En los sindicatos donde el conflicto entre peronistas y antiperonistas era particularmente áspero, muchos de los interventores nombrados por la CGT no pudieron desalojar del poder a los grupos antiperonistas que se habían hecho cargo del sindicato. Todo lo cual llevó a una creciente pérdida de confianza por parte de la dirigencia peronista. El 26 de octubre, en una reunión a la que concurrieron más de

⁴ *Ibíd.*, pág. 33.

⁵ *El Obrero Ferroviario*, octubre de 1955. Un fenómeno similar se presentó en los sindicatos de obreros del petróleo, de la carne y del vestido.

⁶ CGT, 7 de octubre de 1955.

⁷ *Ibíd.*

⁸ *La Vanguardia*, el diario socialista, publicó hacia fines de octubre una información sobre la situación sindical en Rosario donde atacó enérgicamente la actitud de las autoridades locales de devolver la sede de la CGT a los peronistas, después de que hubiera sido tomada por una comisión local socialista/sindicalista. Véase *La Vanguardia* del 27 de octubre de 1955.

⁹ Véase Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, págs. 87-90, en lo relativo a diferentes respaldos civiles de distintas tendencias militares.

300 jefes sindicales peronistas para tratar la crítica situación, Framini pidió que Cerrutti Costa rectificara esas violaciones del pacto del 6 de octubre.

Cerrutti Costa respondió con un decreto que regulaba el proceso electoral. Esencialmente, el decreto despojaba de su autoridad a todos los dirigentes gremiales, designaba a tres interventores por sindicato mientras se desarrollara el proceso electoral y nombraba un administrador de todos los bienes de la CGT. Esta contestó declarando una huelga general de protesta que debía iniciarse el 2 de noviembre a medianoche. Llegadas las cosas a ese punto, el gobierno pareció inclinarse inexorablemente por los partidarios de la línea dura. El propio Lonardi, cuya salud declinaba rápidamente, no estaba en el control efectivo del gobierno. Sólo Cerrutti Costa y el general Bengoa estaban en favor de evitar el conflicto a cualquier precio. El caso fue que el ala conciliadora obtuvo una victoria temporaria en negociaciones de último minuto con la CGT y se evitó la huelga.

Ese acuerdo representó una considerable concesión por parte del gobierno y demostró la importancia que el ala conciliadora asignaba al frágil *modus vivendi* establecido entre el gobierno y los gremios. Esencialmente, permitía a Natalini y Framini permanecer a la cabeza de la CGT. Además estipulaba que los sindicatos donde no hubiera conflicto interno podían seguir a cargo de los dirigentes que tenían, que serían ayudados por dos supervisores, designados por el Ministerio de Trabajo, hasta las elecciones internas. En aquellos gremios donde había conflicto se designaría un interventor hasta los comicios; nombrado por el Ministerio de Trabajo, ese funcionario sería asesorado por una comisión conjunta representativa de las tendencias rivales. Esta crisis convenció al ala tradicional y liberal del gobierno de que sólo el alejamiento de Lonardi, y junto con él de la influencia ejercida por los nacionalistas católicos, partidarios de la conciliación, aseguraría una aplicación cabalmente antiperonista de los principios de la revolución realizada contra Perón.

Si bien no hubo ningún problema específicamente sindical en los hechos conducentes al distanciamiento de Lonardi, a quien se lo obligó a renunciar el 13 de noviembre, el punto decisivo del ataque lanzado por las fuerzas antilonardistas siguió siendo la política sindical del gobierno. La prensa radical y socialista abundó en llamamientos apenas velados a las fuerzas armadas para que salvaguardaran la democracia y la libertad ganadas al caer Perón. Una campaña desatada por esa prensa y cuidadosamente orquestada insistió en subrayar la represión sufrida bajo Perón por los sindicalistas no peronistas y en destacar las opiniones de éstos sobre la continuación del liderazgo peronista en la CGT y las proyectadas elecciones gremiales. El tema básico era coherente, La CGT debía ser intervenida y los delitos de los peronistas investigados. Diego Martínez, dirigente del gremio de la carne antes de 1945, sostuvo:

“Hay que destruir una maraña, hay que desmontar la máquina pieza por pieza, hay que esclarecer conciencias, señalar delitos. negociados, defraudación de fondos sociales en los sindicatos antes de hablar de elecciones.”

La solución inmediata que preconizó fue

“la entrega de todas las organizaciones a los gremialistas libres”.¹⁰

A la luz de esta actitud, el compromiso alcanzado el 2 de noviembre entre los dirigentes gremiales peronistas y el gobierno confirmó la opinión de radicales y socialistas en el sentido de que se necesitaba un cambio de gobierno. Ya no vieron esperanza alguna de que fuese posible convencer al gobierno de que era insensato seguir un camino que inevitablemente confirmaría el dominio peronista de los sindicatos. El 13 de noviembre asumió la presidencia el general Aramburu: la persuasión se tornó innecesaria, la primera tentativa por integrar los sindicatos peronistas a un Estado no peronista había fracasado. Tras renovados ataques de los antiperonistas contra muchos locales sindicales, y al no responder Aramburu un pedido de cumplimiento del pacto del 2 de noviembre, la CGT declaró el 14 de noviembre una huelga general por tiempo indeterminado. Ese mismo día el gobierno declaró ilegal la huelga y dos días después intervino la CGT y todos los sindicatos.

Factores determinantes en el trasfondo de la ruptura: el surgimiento de las bases

Para comprender el desarrollo de las siete semanas siguientes a la caída de Perón debemos poner la mirada más allá del Primer plano donde se destacan los acuerdos, los compromisos y los conflictos. El factor que guió la política de Lonardi parece ser bastante claro. Lonardi estaba dispuesto a considerar posible, en el

¹⁰ *Crítica* 2 de noviembre de 1955.

nivel político general, una victoria peronista en elecciones convocadas en el lapso de un año.¹¹ La única reserva que formulaba, era la exigencia de

“un peronismo depurado de los vicios que lo llevaron a la derrota. Para él, no había más vencidos que los dirigentes venales y corruptos”.¹²

El sector de Lonardi admitía que el peronismo conservara el dominio de la clase trabajadora y sus instituciones con la condición de que, tras una breve depuración de los más implicados en la corrupción del régimen, los sindicatos se avinieran a respetar como esferas claramente demarcadas la acción del gobierno, por un lado, y la representación de los trabajadores, por otro, y restringieran su actividad a esta última.

El ala nacionalista del antiperonismo concordaba con buena parte de lo realizado por Perón. Veía en su movimiento un baluarte contra el comunismo. Al poner el énfasis en la justicia social dentro de una estructura de capital humanizado, al abrazar los intereses nacionales y comunitarios como opuestos a los de clase, el peronismo apelaba al ideal de armonía y orden sociales, de inspiración principalmente católica, que postulaba ese grupo. El problema era esencialmente de límites y excesos. Si los sindicatos admitían la necesidad de mantenerse en su propia esfera, y si podía eliminarse la corrupta demagogia de los personajes más estrechamente comprometidos con Perón, los sindicatos conducidos por peronistas tenían un importante papel que desempeñar en la Argentina posterior a Perón, como órganos de control social y canales de expresión de las masas trabajadoras. Ciertamente, un tema en el que insistió la prensa peronista que subsistió en libertad en ese período fue el peligro de que los comunistas coparan el movimiento laboral si los peronistas eran proscritos de éste.

Desde el punto de vista de los dirigentes sindicales el problema de la motivación y los objetivos es más complejo. Estaban ciertamente preparados para realizar considerables sacrificios con tal de adaptarse a la nueva situación. Esto se advierte en la forma en que se opusieron a muchas expresiones de oposición espontáneamente brotadas de las bases y en la firmeza con que declararon el 17 de octubre día de trabajo normal. Similarmente, parecieron hacer lo posible para evitar cualquier actividad que pudiera interpretarse como ajena a la esfera de intereses estrictamente sindicales. Así, por ejemplo, la publicación a fines de octubre del Plan Prebisch, cuyas proposiciones parecían de orientación contraria a toda la filosofía económica de los sindicatos, no provocó ninguna declaración pública de la CGT.

En principio, no parece haber existido razón alguna por la cual no pudiera arribarse a un *modus vivendi* practicable entre el gobierno y los sindicatos. No fue una intransigente lealtad a su depuesto líder el obstáculo que surgió en el camino hacia tal acuerdo. Se ha sugerido que los dirigentes gremiales se excedieron en sus pretensiones sin comprender el delicado hilo tenso sobre el cual Lonardi y sus seguidores caminaban haciendo equilibrio. Bengoa, ministro de Guerra y destacada figura entre los partidarios de la conciliación, envió a Lonardi el 8 de noviembre una carta de renuncia donde se refería a “la falta de comprensión de algunos grupos, que eran el mayor obstáculo para la realización de la consigna básica de Lonardi de “ni vencedores ni vencidos”¹³. Pero, ¿fue una “falta de comprensión”?

¿Sobreestimaron los dirigentes sindicales su propia fuerza y la solidez de su posición para negociar y terminaron por perder todo? ¿Por qué, una vez hechas las concesiones que se mencionaron, no cedieron más para robustecer la posición de Lonardi?

Al evaluar este problema es preciso tomar en cuenta dos factores. Primero, el hecho de que la CGT llegó a dudar cada vez más si no de las intenciones, al menos de la capacidad que Lonardi y su grupo tenían para cumplirlas. En la crisis del 26 de octubre, durante su entrevista con Cerrutti Costa, Framini se refirió precisamente a esa cuestión. No obstante los bellos discursos de Cerrutti, las ocupaciones de locales sindicales por comandos civiles continuaban. El problema residía en que en muchos campos Cerrutti no tenía poder para actuar. En la práctica, el sector nacionalista del gobierno carecía de autoridad suficiente, dentro de las fuerzas armadas o de la policía, para impedir esos ataques. El creciente número de detenciones de dirigentes sindicales de segunda o tercera fila planteaba un problema similar; los sectores de las fuerzas armadas o de la policía que las efectuaban tenían autonomía de acción.

Esto puso a la jefatura sindical en una posición muy difícil, pues existían concesiones que no podían hacer sin debilitar incluso la base mínima de su poder y advertían que la falta de control, por el gobierno, de esa actividad antiperonista conduciría Inevitablemente a una creciente anarquía en el movimiento y a una

¹¹ “Véase la declaración formulada al respecto por Cerrutti Costa, en Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, págs. 137-43. Acerca de los pensamientos y actos de Lonardi en ese período véanse Luis Ernesto Lonardi: *Dios es justo*, Buenos Aires, 1958, y Marta Lonardi: *Mí padre y la revolución del 55*, Buenos Aires, 1980.

¹² Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, pág. 139.

¹³ *Ibíd.*, pág. 97.

erosión de sus propias posiciones hasta el punto de tornarlas simplemente insostenibles. En algún punto del camino de los compromisos era necesario detenerse para no acabar autorizando su propia eliminación. Se trataba, entonces, de algo similar a un círculo vicioso, puesto que Cerrutti Costa y el sector nacionalista eran militar y políticamente demasiado débiles como para dar las seguridades prácticas que los dirigentes sindicales necesitaban para convencerse de que efectuando una concesión tras otra no desgastaban sus posiciones de liderazgo. Y, al mismo tiempo, sin esas concesiones de los sindicatos Lonardi y sus partidarios se debilitaban más aún en lo militar y lo político.

Sin embargo, un segundo factor, más decisivo aún, que se debe tomar en cuenta se refiere a la actividad de las bases peronistas. Cualquier tentativa por comprender las acciones de la jefatura peronista y el colapso del interregno de Lonardi debe tener en consideración ese factor. Durante esos meses, la jefatura sindical peronista de ningún modo tuvo las manos libres para obrar como mejor le pareciera. La amplitud de la resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe contra Perón y la dureza de la respuesta a esa resistencia, contribuyeron en medida importante a determinar los acontecimientos de esos meses. No obstante la disposición a transar mostrada por Di Pietro, la reacción inicial de incredulidad estupefacta ante la renuncia de Perón pronto cedió su sitio a una serie de manifestaciones espontáneas en los distritos obreros de las principales ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, el ejército hizo fuego contra una numerosa manifestación que procuraba llegar al sector céntrico de la Capital Federal y muchos de sus integrantes resultaron heridos. También se informó sobre nutridos disparos de armas pequeñas en la zona de Avellaneda.¹⁴ Fue preciso enviar a Ensenada y Berisso fuertes contingentes de refuerzos para ocupar todas las posiciones estratégicas y puntos de acceso a las ciudades.¹⁵

Rosario, llamada “la capital del peronismo”, presentó las más serias dificultades a las fuerzas armadas. Ya el 24 de septiembre *The New York Times* informó sobre vehículos blindados que abrieron fuego contra las manifestaciones obreras, y la agencia Reuter habló de varios muertos en esos hechos. Estas versiones fueron sin duda exageradas, puesto que días después se informó sobre un número de bajas mucho menor, pero no hay duda de que en Rosario, en medio de una fuerte tensión, hubo considerable resistencia a las nuevas autoridades. En efecto, desde el 18 de septiembre, o sea desde dos días después de estallada la revolución antiperonista, la ciudad estaba paralizada. Desde entonces hasta el 23 de septiembre hubo incesantes manifestaciones en el sector céntrico, adonde llegaban trabajadores del cinturón Industrial, sobre todo desde los grandes frigoríficos de la zona Sur. Por la noche se oían constantes disparos de armas de fuego y detonaciones de bombas. Todas las fábricas estaban paralizadas.¹⁶

Las dificultades enfrentadas allí por las fuerzas rebeldes se acrecentaban por la firme lealtad a Perón del regimiento de infantería que, bajo las órdenes del general Iñiguez, tenía su acantonamiento en Rosario y se mantuvo en su cuartel. Sólo cuando las unidades rebeldes de Santa Fe y Corrientes pudieron ser enviadas allí el 24 y el 25 de septiembre las nuevas autoridades iniciaron la tarea de recobrar el control de la ciudad. Esto exigió varios días más. El 24 y el 25 hubo serios combates callejeros en que se utilizaron tranvías y automóviles como barricadas.¹⁷ Los trabajadores de los talleres ferroviarios declararon una huelga general a la que se sumaron los obreros de los frigoríficos y otras plantas industriales. El 27 quedaron suspendidos todos los servicios de trenes y ómnibus entre Rosario y Buenos Aires. Sólo cuando el ejército ocupó físicamente todo el sector céntrico de la ciudad y dispuso el toque de queda –las tropas harían fuego contra cualquier persona que estuviera en las calles después de la 20– fue restaurado el orden.

El restablecimiento de la autoridad formal por las fuerzas revolucionarias no puso fin a la resistencia de las bases peronistas. Durante todo octubre, al intensificarse la batalla por la posesión de los sindicatos, hubo huelgas, no dispuestas por los dirigentes gremiales, en protesta contra los ataques de los comandos civiles y el creciente número de detenciones. El relato que ofrece un activista de la atmósfera vivida en Rosario a mediados de octubre constituye un elocuente testimonio de la lucha subyacente que se desarrollaba:

¹⁴ *La Nación*, 24 de septiembre de 1955, menciona tiroteos que se produjeron en Avellaneda con intervención de “elementos indisciplinados”. Detalles de la manifestación en Lanús hay en Roberto: “De la resistencia peronista a las elecciones del 11 de marzo”, *Peronismo y Socialismo*, n° 1, septiembre de 1973.

¹⁵ *La Nación*, 26 de septiembre de 1955.

¹⁶ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, 14 de enero de 1974. En ese momento Belloni trabajaba en el puerto de Rosario.

¹⁷ *New York Times*, 25 de septiembre de 1955. Esta es una de las mejores fuentes acerca de los sucesos de la Argentina en ese tiempo; ciertamente muchos sucesos que nunca aparecieron en la prensa argentina pueden encontrarse allí.

“Los trabajadores en cambio rugían de indignación y se hallaban prácticamente en pie de guerra dispuestos a lanzarse a la lucha en cualquier momento [...] Rosario daba la sensación de una ciudad ocupada por el enemigo, en medio de una atmósfera de sorda rebelión próxima a estallar.”¹⁸

Ya para fines de octubre aparecieron los embriones de lo que llegaría a ser conocido como la Resistencia Peronista. En Santa Fe, por ejemplo, se creó un Frente Emancipador que empezó a coordinar la oposición sindical peronista.¹⁹ El rencor subyacente y el sentimiento de rebelión ya descritos encontraron un canal de expresión en el llamamiento no oficial a una huelga general que lanzaron varios sectores peronistas para la simbólica fecha del 17 de octubre. A despecho de la orden dada por la cúpula de la CGT en el sentido de que debía ser un día laboral normal, grandes números de trabajadores peronistas ignoraron esa exhortación. *The New York Times* calculó que el ausentismo fue ese día del 33 por ciento.²⁰ Todos los puertos quedaron paralizados y tropas de marinería patrullaron infructuosamente las zonas portuarias en busca de trabajadores ociosos para obligarlos a retomar sus tareas.²¹

Análogamente, la huelga proclamada por la CGT para el 3 de noviembre y cancelada después fue convertida por los militantes de base en otro masivo acto antigubernamental. Plantas industriales muy importantes cerraron sus puertas en el país entero.²² Los “perturbadores” fueron sistemáticamente capturados. Si bien la afirmación de la CGT en el sentido de que resultaron detenidos alrededor de 25.000 delegados gremiales parece exagerada, no hay duda de que el número de arrestos fue tal que exacerbó considerablemente el resentimiento y la hostilidad de los peronistas de base contra las nuevas autoridades.

Es oportuno aclarar la índole de esa oposición de las bases. Fue fundamentalmente espontánea, instintiva, confusa y acéfala. Un participante en esos hechos ha narrado cómo él y otros trabajadores peronistas fueron a preguntar a los dirigentes sindicales del frigorífico La Blanca, en Avellaneda, qué medidas se adoptarían para hacer frente al golpe contra Perón:

“Instintivamente tratábamos de defender algo que sentíamos que perdíamos; no pudimos hacer otra cosa que ir a nuestros dirigentes para ver lo que podíamos hacer en nuestra fábrica. Pero la respuesta fue definitiva: A Perón lo tiran al tacho de basura, y a nosotros también.”²³

Este episodio se reiteró regularmente durante esos dos meses. El mismo activista que describió el “clima de rebelión” vivido en Rosario agregó:

“pero no se veía en qué forma podría llevarse a cabo la insurrección pues no había ni sombra de organización, ni se vislumbraba la existencia de un grupo que tuviese cierta autoridad”.²⁴

Ya entonces aparecían formas embrionarias de resistencia organizada, pero en general los canales más frecuentes de reacción consistieron en iniciativas espontáneas y atomizadas, que con frecuencia asumían la forma de huelgas no oficiales. Cuando se presentaba un motivo más general, como el 17 de octubre o la huelga proclamada por la CGT para el 3 de noviembre, las bases lo aprovechaban como medio de mostrar su rechazo de todo el proceso que se operaba en la Argentina. Pero en ausencia de una jefatura coherente y nacional esas acciones no podían pasar de la protesta defensiva.

Este fenómeno de la resistencia ofrecida por las bases, que duró subyacente durante todo ese período, agregó una dimensión vital al proceso entero de negociación y compromiso entre el gobierno y los líderes sindicales. A la luz de esta oposición se torna claro que los dirigentes gremiales, alrededor de 300, que negociaban en Buenos Aires el futuro del movimiento no tenían de ningún modo las manos libres para obrar como mejor les pareciera. La peligrosa ola de fondo de oposición creada por los afiliados de base amenazaba con hacerlos a un lado si concedían demasiado. En la reunión del 26 de octubre Framini dijo claramente al gobierno que “la masa obrera estaba dispuesta a demostrar fuerza”, pero hasta el momento habían obedecido a sus líderes: en otras palabras, esa obediencia dependía de que éstos logran poner fin a los ataques contra los sindicatos.²⁵

¹⁸ Juan M. Vigo: *La vida por Perón: crónicas de la Resistencia*. Buenos Aires, 1973, pág. 54.

¹⁹ *Ibíd.*, pág. 50.

²⁰ *New York Times*, 20 de octubre de 1955.

²¹ Entrevista con Alberto Belloni.

²² *New York Times*, 4 de noviembre de 1955. Este diario da para todo el país una cifra de ausentismo del 65 por ciento, que llegó al 100 por ciento en los barrios de mayor concentración industrial.

²³ Roberto: “De la resistencia peronista”.

²⁴ Vigo: *La vida por Perón*. pág. 55.

²⁵ Véase Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, pág. 54.

Los jefes sindicales peronistas tenían muy clara conciencia de la amenaza que esto planteaba a su credibilidad y del peligro de ser contorneados y superados que corrían si no obtenían de Cerrutti Costa concesiones concretas suficientes para convencer a los trabajadores peronistas de que los “sindicalistas libres”, o sea los antiperonistas, no se quedarían con los gremios. En ausencia de tales concesiones era preciso que se los viera ejercer de alguna manera la conducción, así consistiera sólo en ponerles un sello de goma a movimientos ya emprendidos por las bases. El corolario lógico de esta situación era el siguiente: por más que personalmente favorecieran el compromiso, los jefes sindicales no podían, *en la práctica*, garantizar su cumplimiento. Tal como lo demostraban los episodios del 17 de octubre y el 3 de noviembre, el control que ejercían sobre sus afiliados era limitado. Esto a su vez alarmaba a los elementos más antiperonistas de las fuerzas armadas y robustecía sus posiciones, lo que dificultaba más aún a Lonardi efectuar concesiones como las que hubieran aplacado a las bases peronistas.

La cúpula gremial peronista pasó por un período de extremada confusión: muy vacilante su confianza en sí misma, estuvo lejos de pretender demasiado en sus conversaciones con el primer gobierno de la Revolución Libertadora y se limitó, en realidad, a reaccionar a una serie de presiones que no estaba a su alcance controlar. Así lo demostró ampliamente el acto final, la huelga general del 14 de noviembre. Aunque oficialmente sólo debía comenzar el 14, muchos obreros habían suspendido el trabajo ya el 13, día en que también se produjeron en Rosario, según se informó, choques con saldo de muertos.²⁶ Pero en tanto que los trabajadores peronistas utilizaron el llamamiento a la huelga para expresar su descontento, la cúpula sindical nacional hizo poco por organizar el movimiento, y su declaración de huelga tuvo los contornos de un último acto de desesperación. En sus recuerdos de ese período, Juan M. Vigo describe así la situación:

“se dio la orden desde Buenos Aires pero no se adoptó ninguna medida anticipada para asegurar su cumplimiento. Burócratas sin noción de lo que es el poder de la, organización, acostumbrados siempre al apoyo o neutralidad benévola del gobierno, quizás creían que las cosas se iban a desarrollar igual que antes”.²⁷

La respuesta que el obrero peronista medio dio al llamamiento de huelga fue rotunda. El 15 de noviembre, el gobierno admitió oficialmente que el ausentismo había sido del 75 por ciento en Buenos Aires y del 95 por ciento en las principales industrias.²⁸ Pero la falta de dirección en el plano nacional y la fuerza de la represión condenaron la huelga a la derrota. El nuevo presidente, general Aramburu, amenazó a los “agitadores huelguistas” con tres meses a tres años de cárcel. *The New York Times* informó sobre la detención de más de 100 delegados en Buenos Aires y el castigo físico de muchos otros activistas que desde el exterior de las fábricas exhortaban a los obreros a parar.²⁹ Hacia el fin del primer día habían sido arrestados más de mil huelguistas. El 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos los sindicatos que la integraban, a muchos de cuyos dirigentes encarceló. Ese mismo día la huelga fue levantada, aunque ya muchos trabajadores habían empezado, en vista de la represión, a concurrir al trabajo.

Así fue como la interrupción del interregno de Lonardi dejó una clase trabajadora peronista derrotada, confundida, pero que también había demostrado su disposición a defender espontáneamente “algo que instintivamente sentían que estaban perdiendo”.

Para los dirigentes sindicales esos dos meses representaron una divisoria de aguas, el paso de una era. Desde el principio habían demostrado incapacidad para actuar con decisión, una suerte de parálisis de la voluntad de obrar. Citada al comienzo de este capítulo, la descripción que de ellos deja Alberto Belloni refleja el juicio de los activistas de base acerca de sus líderes. La condena que formula Miguel Gazzera es más definitiva, aunque así sea tan sólo por dictarla alguien que fue dirigente sindical en ese momento:

“Estábamos satisfechos con lo que ya habíamos vivido y gozado. Estábamos inexorablemente terminados, agotados totalmente.”³⁰

²⁶ *New York Times*, 15 de noviembre de 1955.

²⁷ Vigo: *La vida por Perón*, pág. 69.

²⁸ *La Nación*, 16 de noviembre de 1955. Sólo se abstuvieron de responder aquellos sindicatos ya tomados por los antiperonistas, como los de empleados de comercio y los bancarios, y los servicios públicos, que los militares mantuvieron abiertos por la fuerza.

²⁹ *New York Times*, 16 de noviembre de 1955.

³⁰ Miguel Gazzera: “Nosotros los dirigentes”, en Norberto Ceresole y Miguel Gazzera: *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, 1970, pág. 61.

Aramburu y la clase obrera: primeros elementos de una política

Hemos visto que desde el comienzo de la rebelión militar contra Perón surgió en las bases peronistas una fuerte resistencia a las nuevas autoridades. Esa oposición se centró primero en la toma de los sindicatos por los dirigentes gremiales libres y en los arrestos que ya se efectuaban tanto de líderes como de activistas. Principalmente aquella actitud reflejó una sensación general de miedo, incertidumbre y confusión y se cristalizó en torno de temas como la ofensiva antiperonista para obtener el control de la estructura sindical. En general, durante el breve período del gobierno de Lonardi esa ofensiva antiperonista no llegó hasta el nivel del sitio de trabajo mismo, en el taller o en la planta.

Esto había de cambiar inmediata y radicalmente con el nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. La política del nuevo gobierno se basó en el supuesto de que el peronismo constituía una aberración que debía ser borrada de la sociedad argentina, un mal sueño que debía ser exorcizado de las mentes que había subyugado. Concretamente, la política del nuevo gobierno con la clase trabajadora siguió tres líneas principales. Ante todo, se intentó proscribir legalmente un estrato entero de dirigentes sindicales peronistas para apartarlos de toda futura actividad. Esto concordó con la nueva intervención de la CGT y la designación de supervisores militares en todos sus sindicatos, lo que habría de preparar el camino para la creación de “bases democráticas en los sindicatos, y la elección de dirigentes con autoridad moral”.³¹

En segundo término, se llevó a cabo una persistente política de represión e intimidación del sindicalismo y sus activistas en el plano más popular y básico. Finalmente, hubo un esfuerzo concertado entre el gobierno y los empleadores en torno del tema de la productividad y la racionalización del trabajo, proceso que marchó de la mano con un intento de frenar los salarios y reestructurar el funcionamiento del sistema de negociaciones colectivas.

La primera línea de esa política fue la de cumplimiento más fácil. Además de los centenares de dirigentes gremiales de nivel nacional arrestados por el gobierno de Aramburu al declararse ilegal la huelga de noviembre, miles de activistas sindicales de nivel intermedio fueron destituidos. La preponderante actitud de inercia y confusión en que estaban sumidos y que ya hemos descrito no había de serles muy útil para enfrentar los rigores del período en que ahora entraban. El gobierno fundó una comisión especial para investigar los delitos e irregularidades cometidos por los dirigentes sindicales peronistas. Las nuevas autoridades también aprobaron el decreto 7107, de abril de 1956, que excluía de cualquier actividad gremial a todos los que hubiesen tenido entre febrero de 1952 y septiembre de 1955 una posición de liderazgo en la CGT o sus sindicatos. Esta proscripción se amplió a todos los que habían tomado parte en el congreso celebrado por la CGT en 1949, donde se aprobaron nuevos estatutos que proclamaban a la central obrera como “fiel depositario de la doctrina peronista”. La prohibición caía también sobre todos los dirigentes del ahora proscripto Partido Justicialista, así como sobre todos los investigados por la comisión especial. Este decreto se modificó meses después, pero gran número de antiguos dirigentes sindicales siguieron proscriptos.³²

Un problema mucho más decisivo y complejo fue el de la organización sindical en el nivel del taller o la planta, donde también prevalecían los peronistas. Inmediatamente después de intervenida la CGT, el Ministerio de Trabajo declaró disueltas y carentes de autoridad a todas las comisiones internas de los sitios de trabajo. Ya a mediados de noviembre de 1955³³, en muchas fábricas los delegados eran designados por el Ministerio de Trabajo. Este problema fue debatido a fines de diciembre de 1955 por la Junta Asesora Gremial creada para aconsejar al interventor de la CGT, capitán Patrón Laplacette. Se convino en que la solución, arbitrada por el Ministerio, de nombrar delegados a los trabajadores más antiguos, no peronistas, resultaba insatisfactoria porque en general se consideraba que esos obreros eran los menos militantes y, en consecuencia, no contaban con el respeto de sus representados.³⁴ Finalmente, Patrón Laplacette dispuso que los delegados gremiales fueran designados por los interventores de cada sindicato. En la práctica, empero, en muchas empresas, los empleadores tomaron la cosa en sus propias manos. En La Bernalesa, por ejemplo, importante planta textil situada en el Gran Buenos Aires, los 120 delegados gremiales, principalmente peronistas, fueron despedidos.³⁵ Incluso la Comisión Gremial del Partido Socialista consideró su deber enviar a Aramburu una nota donde le advirtió sobre los peligros de tales acciones e insistió en que ningún

³¹ Declaración del ministro de Trabajo, Raúl Migone, *La Nación*, 17 de noviembre de 1955.

³² El decreto 14.190, que modificó el anterior decreto 7107, habló de la rehabilitación de aproximadamente 92.000 personas. Sin embargo, aún después de esto algunos observadores sostuvieron que más de 50.000 seguían legalmente proscriptas de la actividad gremial. Véase *Qué*, 26 de agosto de 1956.

³⁴ *Qué*, 21 de diciembre de 1955.

³⁵ *La Verdad*, 2 de enero de 1956.

trabajador fuera despedido sin que su caso fuese visto por el tribunal de arbitraje de emergencia instituido por el gobierno.³⁶

Impacto del peronismo en el nivel de taller y planta durante la era de Perón

Esta actitud de controlar y debilitar las comisiones internas estuvo íntimamente ligada a una de las principales preocupaciones de la política económica preparada por el nuevo gobierno: aumentar la productividad de la Industria argentina. No se trataba de una novedad para el gobierno y los empleadores argentinos. Esa inquietud subyacía en gran parte de las crecientes tensiones surgidas entre empresarios y sindicatos durante los últimos años del gobierno peronista. Para comprender la importancia de este punto en la formación de la resistencia obrera a las condiciones imperantes después de 1955, debemos primero examinar las tentativas realizadas en el lapso 1945-1955 para reestructurar el equilibrio del poder en el nivel del taller y la planta y echar así las bases de una racionalización eficaz. El mayor peso social alcanzado por la clase trabajadora y sus instituciones en la sociedad durante el régimen peronista se reflejó inevitablemente en el lugar de trabajo. En términos generales, esto significó una transferencia de poder, dentro del sitio de trabajo, de la empresa a los empleados. Esa transferencia proporcionó la lente a través de la cual se filtró gran parte de la retórica de la ideología peronista. Consignas formales relativas a la “dignidad del trabajo”, “la humanización del capital”, “la responsabilidad social del empleador”, fueron concretamente interpretadas por el obrero en función de la capacidad que él tenía, bajo Perón, para controlar en mayor o menor grado su vida en el taller o la planta, o al menos para limitar las prerrogativas de la parte patronal en esa esfera. Después de la crisis económica de 1951-52, toda esa esfera de las relaciones en el sitio de trabajo llegaría a ser el punto donde se centrarían las preocupaciones de las empresas y el Estado, pues allí se conectaba el tema del ulterior desarrollo económico argentino con el de la mayor productividad.

En términos económicos, se estimaba que aumentar la productividad del trabajo era vital para alcanzar la acumulación de capital necesaria con el fin de que la Argentina avanzara hacia una nueva etapa de crecimiento económico, basada en la producción de maquinaria pesada y bienes de consumo duraderos de tipo intermedio, fase estipulada en el Segundo Plan Quinquenal forjado por el régimen peronista. Desde el punto de vista técnico, en las condiciones de recesión económica que prevalecían a principios de la década 1950-60 ese aumento de producción no podía ser logrado principalmente mediante la adopción de maquinaria nueva. Se entendía, en cambio, que al menos en el corto plazo la mayor productividad del trabajo debería originarse en un aumento del producto por trabajador a partir de la maquinaria existente.³⁷ Empero, desde el punto de vista del empleador y del Estado el problema no era de naturaleza primordialmente económica o técnica, sino social. Residía precisamente en el insatisfactorio equilibrio de fuerzas generado en el plano del taller o la planta por una clase trabajadora confiada en sí misma y por un poderoso movimiento sindical que contaba con el apoyo del Estado.

Concretamente, los empleadores elaboraron una estrategia basada en tres puntos con el fin de contrarrestar los efectos del mayor poder de los obreros en los sitios de trabajo. Primero, desde principios de los años 1950-60 los empleadores se empeñaron cada vez más en revisar los planes de incentivos existentes, estableciendo nuevas tasas de bonificación con ayuda de estudios del trabajo conducentes a disminuir los tiempos de ejecución, en otras palabras, a acelerar la producción. Allí donde esos planes aún no existían los empleadores procuraron activamente introducirlos en sus fábricas. Este interés por recurrir a incentivos para intensificar la producción era inspirado por una inquietud básica común a los empleadores y al Estado acerca de los hábitos laborales “antisociales”. En condiciones de plena ocupación, con un movimiento gremial en expansión y respaldado por el Estado, y con un alto grado de confianza en sí mismos, los trabajadores, no poco naturalmente, tendieron a adoptar una definición de legítima intensidad del trabajo más flexible que la vigente en la era anterior a Perón. Salarios básicos relativamente altos, junto con los beneficios marginales incorporados a los nuevos contratos, redujeron considerablemente la tradicional compulsión de los obreros a intensificar el esfuerzo y ajustarse a hábitos laborales “saludables”. Si bien los empleadores habían aceptado esa actitud durante la expansión económica inmediatamente consecutiva a la guerra, a comienzos de la década 1950-60 estaban resueltos a reajustar los hábitos de trabajo y su intensidad.

El segundo motivo de preocupación de los empleadores era la existencia, en muchos de los contratos firmados en el período 1946-48, de cláusulas que regulaban las condiciones de trabajo. Tales cláusulas,

³⁶ *La Vanguardia*, 5 de enero de 1956.

³⁷ Véase el discurso de José Gelbard, presidente de la Confederación General Económica, ante el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar celebrado en marzo de 1955, en el informe sobre las actas de dicho congreso. *Hechos e Ideas*, Buenos Aires, 1955, pág. 282.

obtenidas por un movimiento laboral insurgente en la ola de huelgas de aquellos años, limitaban los derechos de la empresa en lo relativo a movilidad de la mano de obra y especificación de la tarea y garantizaba beneficios sociales tales como la licencia por enfermedad sin pérdida de haberes. El símbolo del nuevo equilibrio del poder en el nivel del taller y la planta, y el principal motivo de queja de los empleadores, consistía en la comisión interna de delegados gremiales. Los contratos concluidos en los años iniciales del primer gobierno de Perón contenían cláusulas que garantizaban el reconocimiento de esas comisiones por la parte patronal y aseguraban la permanencia de los delegados en sus empleos tanto durante su gestión en ese carácter como después de concluida. Aunque sus funciones básicas consistían en supervisar el cumplimiento de las provisiones del contrato, a comienzos de los años 1950-60 llegaron a asumir un papel más amplio en la consolidación de la confianza de la clase obrera en sí misma y en la limitación de las prerrogativas de las empresas en la esfera de la producción. Los empleadores vieron en los delegados un importante obstáculo contra la racionalización eficaz y la imposición de disciplina laboral. José Gelbard, líder de los empresarios, había por cierto deplorado vigorosamente en el Congreso de la Productividad, celebrado en marzo de 1955, la posición que

“asumen en muchas empresas las comisiones internas sindicales que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de trabajo honesto por una paga justa [...] tampoco es aceptable que por ningún motivo el delegado obrero toque el silbato en una fábrica y la paralice”.³⁸

Los empleadores argentinos tropezaron con una resistencia considerable cuando intentaron poner en práctica su estrategia. Sin duda alguna fue esa resistencia, que rara vez se menciona en los documentos oficiales, lo que determinó a los empleadores a solicitar el apoyo tanto del Estado como de la cúpula sindical en una campaña oficial por la productividad lanzada en 1955. En este sentido, el Congreso de la Productividad, donde culminó esa campana, constituyó una tentativa por aplicar oficialmente, con ayuda del prestigio personal de Perón y el peso del Estado y del aparato sindical, una política que los empleadores no habían sido capaces de imponer en los años anteriores sobre una base práctica en el plano de cada empresa. La resistencia de la clase trabajadora se cumplió en dos niveles. Uno consistió en una respuesta a los efectos concretos de la ofensiva patronal: oposición al aumento de la carga de trabajo, a la disminución del tiempo de ejecución de las tareas, a la aceleración del trabajo en línea o a la toma de medidas disciplinarias contra los delegados gremiales. En general, esta oposición adoptó la forma de una negativa a cooperar, antes que la de una abierta acción de huelga.³⁹

Con mayor fundamento, sin embargo, los proyectos empresariales sobre productividad y racionalización chocaron con algunos supuestos decisivos, de orden cultural y social, nacidos en el seno de la clase trabajadora por efecto de la experiencia peronista. Los trabajadores cuestionaban, en un sentido directamente básico, la *legitimidad* de muchas de las premisas de que partían los empleadores. Resulta claro, por ejemplo, que grandes sectores de la clase obrera negaban la legitimidad de *cualquier* tipo de incentivo basado en el pago-por-resultados. La insistencia casi obsesiva con que los empleadores, tanto en el Congreso de Confindustria, de 1953, como en el Congreso de la Productividad, 1955, habían preconizado la elemental necesidad de aceptar esos esquemas indicaba su interés en afirmar, antes que la validez de los mecanismos específicos involucrados en la racionalización, la legitimidad de la *idea* de los planes de incentivación como base para establecer la relación entre paga y trabajo. Aunque es verdad que dichos planes resultaban cada vez más atractivos como medio para ganar aumentos de salario en un período de inflación y control salarial por el gobierno, la permanente insistencia de los empleadores en la aceptación del pago-por-resultados indica que ese concepto todavía era inaceptable para muchos trabajadores.

Esa resistencia generalizada al concepto de planes de incentivación y de racionalización arraigaba en el desarrollo durante la era peronista, de una cultura de taller y de planta que traducía la nueva posición social y política de la clase trabajadora en la sociedad argentina a una serie de supuestos y afirmaciones, a menudo informales, acerca de lo que los empleadores tenían o no derecho de exigir a sus trabajadores en el marco del proceso de producción. En ese contexto, resulta claro que para los trabajadores argentinos la manera legítima de mejorar los niveles de vida consistía en actualizar los salarios básicos estipulados por los contratos y congelados muchos de ellos desde 1950.⁴⁰ Salarios basados en pagas altas por hora, junto con beneficios marginales como los aumentos por antigüedad, las asignaciones familiares, etcétera, introducidos; en los contratos del período 1946-48, eran considerados una conquista decisiva por la clase trabajadora.

³⁸ *Ibíd.*, pág. 280.

³⁹ Detalles de esa resistencia hay en Daniel James: “Rationalization and working class response: the limits of factor floor activity in Argentina”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 3, parte 2, 1981, pág. 375-402.

⁴⁰ Véase Doyon: “Conflictos obreros”.

Representaban una expresión concreta de lo que significaba la justicia social para los obreros: la capacidad para ganar un buen salario sin estar sometidos a presiones inhumanas dentro del proceso de producción.

Análogamente, el clamor de los empleadores por la revisión de las cláusulas contractuales que regulaban las condiciones de trabajo encontró una oposición general de los asalariados. En tanto que para la parte patronal esas cláusulas constituían un gran obstáculo para la racionalización eficaz, las prácticas laborales y las restantes provisiones consagradas por ellas eran para los obreros una garantía esencial de la calidad de vida en los sitios de trabajo. Simbolizaban un aspecto crucial de lo que la experiencia peronista significaba para ellos. Expresaban en forma muy concreta el cambio operado en la posición sociopolítica de los trabajadores en el marco social general, en cuanto esa transformación era experimentada en un nivel sumamente básico de la relación entre las clases: en la relación entre empleador y empleado dentro del lugar de trabajo. Representaban, por así decirlo, la letra impresa de la realidad cotidiana que existía más allá de las abstracciones de la retórica peronista. Encarnaban lo que los obreros habían llegado a considerar como la regulación valedera y esencial de la parte que les correspondía en el proceso laboral, por lo que tendían a entender que no estaban sujetas a negociación entre las empresas y los sindicatos.

Esa resistencia ideológica generalizada de los obreros a la estrategia de sus empleadores era de índole a la vez limitada y ambigua. Nunca involucró una crítica de los criterios subyacentes en las relaciones de producción capitalistas. La oposición a la racionalización nunca fue extendida al carácter de negación o duda del derecho de los empresarios a manejar sus plantas. Existen escasos indicios, por ejemplo, de que los trabajadores, en medio de la batalla contra el taylorismo, hayan podido intervenir ellos en ese manejo. Sin duda alguna, la aceptación general de la legitimidad de las relaciones de producción capitalistas y las relaciones de autoridad contenidas en ellas constituía un reflejo de ciertos principios básicos de la ideología peronista.

Pero debemos cuidarnos, por otra parte, de adjudicar las limitaciones del desafío lanzado por los trabajadores a la autoridad capitalista exclusivamente al peso de la manipulación ideológica practicada por el Estado peronista. Tal como lo hemos sugerido ya en el capítulo anterior, así como la conveniencia de armonía social general predicada por Perón encontraba eco importante en la clase trabajadora, así también puede pensarse que el reconocimiento de los intereses respectivos del capital y el trabajo en colaborar mutuamente en el proceso de producción formaba parte en aquel momento de la cultura de la clase obrera. Esto suponía el reconocimiento general del derecho de los empresarios a ejercer el control y la autoridad, así como la aceptación general de un ideal ético según el cual la relación entre empleadores y empleados debía ser consensual. Esto parece haber sido reforzado por una genuina internalización, por parte de los trabajadores, del orgullo en el desempeño industrial argentino, que simbolizaba la recuperación de la estima propia bajo Perón.

Lo que tornó este problema tan complejo y cargado de dificultades tanto para el sector empresarial como para el Estado fue la circunstancia de que si bien pudo haber un acuerdo genuino y abstracto sobre la conveniencia ética de armonía y consenso, la traducción de ese acuerdo a la realidad concreta de las relaciones en el lugar de trabajo supuso versiones distintas de lo que esa situación ideal debía incluir. Desde el punto de vista de la clase obrera, sus nociones de cuál debía ser la fuente de inspiración de los parámetros legítimos de la autoridad gerencial eran profundamente influidas por la cultura del taller a que nos hemos referido y, en forma más general, por el nuevo status de los obreros en la sociedad. Esto significa que no obstante la aceptación general de la autoridad del empleador, en la práctica cotidiana de las fábricas la resistencia ofrecida por los trabajadores en torno de estos puntos representó en *efecto* un tácito desafío a los conceptos fundamentales de la organización capitalista de la producción. Aunque no se lanzó ningún desafío manifiesto al control gerencial, el resultado concreto de la insistencia de los trabajadores en su definición del esfuerzo y las prácticas laborales aceptables en el sitio de trabajo consistió en poner sobre el tapete la autoridad de los empleadores dentro de sus fábricas.

Hacia fines del primer régimen peronista, los empleadores habían obtenido pocos resultados positivos en lo relativo a acuerdos laborales de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio por la clase obrera. La cúpula sindical, consciente de la hostilidad de sus miembros, firmó el Acuerdo Nacional de Productividad estipulado por el Congreso de la Productividad, pero ese documento consistía en gran medida en una declaración de propósitos simbólica, lo menos que los diligentes gremiales podían hacer en vista del considerable capital político personal invertido por Perón en la campaña. Una de las razones de este fracaso residió simplemente en la resistencia ofrecida en el taller y la planta. Frente a la desintegración de la coalición peronista inicial, la creciente dependencia en que se encontró Perón respecto de la clase trabajadora y los sindicatos puso un límite a la presión que el Estado podía ejercer en nombre de los empleadores. Este fracaso siguió obsediendo a los empleadores argentinos. En abril de 1956, la Cámara de Industrias

Metalúrgicas se hizo eco de la misma queja proferida por José Gelbard en el Congreso de la Productividad un año antes:

“Es urgente reestablecer la sana disciplina en las industrias que son hoy algo así como un ejército en el cual mandan los soldados y no sus jefes.”⁴¹

Racionalización y represión en el taller y la planta: la revolución libertadora, llega al lugar de trabajo

Una vez resuelto el problema del poder de los delegados gremiales, el gobierno de Aramburu dirigió su atención al tema de la productividad. Lo abordó mediante el decreto 2739, de febrero de 1956, que autorizó un aumento salarial de emergencia del 10 por ciento mientras se negociaban acuerdos de más largo plazo. El artículo 8 autorizaba la movilidad laboral dentro de una fábrica si se la consideraba necesaria para acrecentar la productividad. El párrafo (d) de ese artículo permitía a los empleadores concluir acuerdos especiales con sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, por encima y al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes. Las cláusulas vigentes relativas a las condiciones de trabajo y a las clasificaciones de las tareas serían prolongadas,

*“con excepción de aquellas condiciones, clasificaciones y cláusulas que directa o indirectamente atenten contra la necesidad nacional de incrementar productividad, las que quedan eliminadas”.*⁴²

Por lo tanto, quedaba bien claro que nuevos acuerdos sobre salarios estarían sujetos a circunstancias relacionadas con la productividad. Pocos días después del decreto, Patrón Laplacette comentó que

“El gobierno depuesto no hizo sino ordenar al Congreso de la Productividad que llegara a conclusiones conocidas y se limitó a anunciarlas sin tomar ninguna medida concreta al respecto.”⁴³

Como reacción contra esas políticas y contra lo que significaban concretamente en términos de peores condiciones de trabajo y debilitamiento de la organización gremial en la fábrica y en el nivel nacional, importantes sectores de la clase trabajadora se embarcaron en la larga lucha defensiva que llegaría a ser conocida, en la cultura de la clase obrera peronista, como “la Resistencia”. En parte constituyó una respuesta defensiva a la franca represión y al hostigamiento de los trabajadores en el sitio de trabajo. Casi todo operario que pudiera ser conceptuado un “perturbador” era vulnerable y estaba expuesto a represalias al capricho del sector patronal. Particularmente vulnerables resultaron ser los delegados gremiales. La situación fue por cierto tan mala, que el Partido Socialista se sintió obligado a enviar a Aramburu, en junio de 1956, un memorial donde deploraba la contraproducente política del gobierno. A su juicio,

“en el ámbito obrero se considera que está en marcha un desquite patronal contra ellos que se ve alentado por la política del gobierno que no actúa para que se haga efectiva su promesa de garantizar la estabilidad pues en muchas partes se han hecho despidos en masa y se deja cesantes a los delegados en las fábricas”.⁴⁴

En la aplicación de esa línea la policía colaboró ampliamente con los empleadores. Un panfleto emitido por obreros metalúrgicos de base se refirió así a una de las estratagemas más comúnmente practicadas por los empleadores:

“El empresario que quiere desprenderse de operarios capaces de hacerse respetar en sus derechos y de exigir el cumplimiento fiel de las leyes o convenios moviliza a la policía y ésta, por intermedio de la Sección Orden Gremial de la Policía Federal, amasa un parte en el que siempre de una manera híbrida y con buen artificio atribuye al obrero el propósito de sabotear la producción. Simultáneamente lo detiene y lo incomunica remitiéndolo a la Sección que corresponde de acuerdo al lugar donde se habría cometido el supuesto delito [...]

⁴¹ *Qué*, 25 de abril de 1956.

⁴² Ministerio de Trabajo y Previsión: Nuevo régimen de remuneraciones y de las convenciones colectivas de trabajo, Buenos Aires, 1956.

⁴³ *La Nación*, 20 de febrero de 1956, Un nuevo decreto, el 6121, dado en abril de 1956, establecía específicamente que en el caso de modernizarse una fábrica no se aplicarían las provisiones sobre el número de operarios consagrados a cada trabajo.

⁴⁴ *La Vanguardia*, 21 de junio de 1956.

no interesa ya, para los fines perseguidos, que el procesado sea puesto en libertad [...] la medida intimidatoria se cumplió y el despido al que se atribuye justa causa legal por el patrón se hizo sin indemnización.”⁴⁵

También era frecuente el hostigamiento dentro de los sindicatos. Los interventores eran con frecuencia socialistas, radicales o sindicalistas que, activos en la era anterior a 1946, ahora aprovechaban las nuevas circunstancias para ajustar viejas cuentas. También dentro de las fábricas, en el plano de los jefes y capataces, hubo mucho margen para la persecución por motivos personales. En los astilleros de Rosario, por ejemplo, el nuevo gobierno reemplazó a todos los ingenieros y jefes de taller. Según las palabras de un activista que trabajaba en los astilleros de ese tiempo, el nuevo jefe de ingenieros era

“un social demócrata muy gorila que había sido castigado por el peronismo. Entonces este hombre venía con mucho espíritu de revancha y él, y el técnico que fue nombrado jefe de talleres se rodearon de toda gente revanchista”.⁴⁶

Esta nueva relación de fuerzas en el plano del taller y la planta fue una condición vital de cumplimiento indispensable para la aplicación de la política de productividad ideada por el gobierno. El decreto 2739 se convirtió en la Biblia de los empleadores que, según lo autorizaba el artículo 8, procuraban eliminar los “obstáculos a la productividad”. Considerados individualmente, esos “obstáculos” eran cuestiones de poca monta, pero acumulados representaban mucho más. En el ánimo de los trabajadores constituyeron la decisiva piedra de toque mediante la cual podían evaluar el cambio de circunstancias operado desde la caída de Perón y medir las consecuencias concretas que la nueva conducción política del país significaba para su vida de trabajo. En este sentido tal vez hayan sido de más importancia, para confirmar la lealtad peronista de la mayoría de los trabajadores, que la cuestión lisa y llana de los salarios.

Un ejemplo típico de esos aspectos secundarios pero simbólicos consistió en la cláusula sobre procedimiento de conciliación contenida en la mayoría de los contratos de la era peronista, En el documento a que ya nos referimos, la Cámara de Industrias Metalúrgicas denunciaba:

“para resolver cualquier reclamación concurren el interesado y los miembros de la comisión interna, a veces en número de hasta cinco a los cuales se les debe abonar las horas perdidas. La concurrencia del reclamante, asistido por el asesor del sindicato, bastaría para garantizar la mejor defensa de sus intereses”.⁴⁷

Debilitado el poder de las comisiones internas, los deseos de los empleadores se convirtieron en la práctica común, lo que disminuyó las garantías de juicio imparcial que el trabajador individual pudiera tener en caso de disputa con el sector patronal.

En forma similar, las garantías contenidas en los contratos en lo referente a clasificación de los trabajos y a salarios eran ahora atacadas como improductivas restricciones de la movilidad laboral y del derecho de los patrones a distribuir a los trabajadores, dentro de las fábricas, como a ellos les pareciera mejor. En muchos casos, el artículo 8 fue interpretado como específicamente prohibitivo de esas salvaguardias. Los empleadores también se quejaban de los derechos de que disfrutaban los obreros cuando se enfermaban en el trabajo: derecho a que se los enviara a su casa, con el día pago, etcétera. También esto se encontraba ahora limitado.⁴⁸ Incluso hubo cambios más pequeños de un lugar de trabajo a otro, aunque pudiera argumentarse que tenían mayor significado inmediato para los trabajadores. En los astilleros de Rosario, por ejemplo, se suprimió el vaso de leche gratuito brindado a los que tenían a su cargo la insalubre tarea de limpiar la sala de máquinas, como se suprimió la provisión, obligatoria para la gerencia, de proporcionarles ropas especiales y máscaras protectoras.⁴⁹

Resultó claro, en consecuencia, que el drástico cambio operado en el equilibrio del poder en el plano político nacional no podía dejar de reflejarse en las fábricas. Sin embargo, una vez más los empleadores fueron decepcionados en lo relativo a resultados de largo término. Aunque hubo amplia supresión de “obstáculos para la productividad”, no hubo aplicación en escala total de los planes de racionalización, ni renovación general de los contratos en un sentido vasto que consagrara legalmente nuevos acuerdos de alcance nacional para toda la industria. Ello se debió en parte a la actitud ambigua del gobierno cuando hubo

⁴⁵ Folleto sin fecha pero probablemente de fines de 1956, en el archivo del autor.

⁴⁶ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero de 1974.

⁴⁷ *Qué*, 25 de abril de 1956.

⁴⁸ Un laudo arbitral dado en la industria frigorífica declaró que las normas existentes de licencia por enfermedad constituían un obstáculo indirecto” a la productividad tal como se la definía en el decreto 2739. Ministerio de Trabajo y Previsión: *Laudo del tribunal arbitral*, n° 63/1956, Buenos Aires, 1956.

⁴⁹ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.

que interpretar la ley frente a casos reales. En este sentido los tribunales de arbitraje y los funcionarios del Ministerio de Trabajo no fueron uniformemente favorables a los empleadores y parecieron vacilar ante la incorporación en masa, en los contratos existentes, de nuevas cláusulas sobre acuerdos en materia de productividad. Esta ambigüedad por parte del gobierno se explica en cierto modo por la resistencia que provocaba en la clase obrera la ofensiva en favor de la productividad, cuya eficacia se redujo. Pero cualesquiera que hayan sido las limitaciones de la implantación general de nuevos planes de trabajo, el efecto total de la supresión de cláusulas que regulaban las condiciones de trabajo y el ataque contra la organización laboral en el nivel de taller y planta fue tal que los obreros consideraron este período como uno de abuso empresarial sin restricciones. Un periódico sindical lo expresó así:

“En particular los empresarios intentaron ignorar y debilitar a las comisiones internas [...] todos estos casos nos dan la pauta de que estamos frente a un revanchismo desmedido e injustificado de los industriales.”⁵⁰

Organización de la resistencia en las fábricas

Fue precisamente para defenderse contra ese “revanchismo” apoyado por el gobierno que los trabajadores emprendieron en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo Perón. Se trató de un proceso fundamentalmente espontáneo y localizado. Un activista de base lo describió en los siguientes términos:

“En realidad todo se da en un proceso larvado, embrionario y gradual que surge de las bases mismas del movimiento obrero y que no es dominado por los viejos burócratas pero tampoco consigue consolidar en la dirección ni siquiera local en Rosario ni siquiera nacional [...], en realidad es un poco como son islotes. Porque yo recuerdo que nosotros, los hombres de ATE en Rosario empezamos a formar una agrupación semiclandestina, la mayoría eran jóvenes que no habían tenido participación antes del 55 y aparte teníamos muy poca vinculación con otros gremios. Recuerdo que aparte de reuniones en casas particulares la única comunicación con otra gente gremial que teníamos era con vitivinícolas, UTA, ATE de Puerto Borghi y madera.”⁵¹

Esas agrupaciones semiclandestinas, que a menudo se reunían en casas privadas, basaron su actividad en cuestiones muy concretas. En el caso del grupo que se acaba de mencionar, una de las primeras medidas adversas contra las cuales se organizaron fue la supresión de la jornada de 6 horas para el trabajo insalubre y la no provisión de ropa protectora. Más común como motivo de encuentro y de organización fue la defensa de los delegados gremiales. En CATITA, gran planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se efectuó en diciembre de 1955 una huelga exitosa contra el despido de varios delegados.⁵² En el Frigorífico Lisandro de la Torre, de la Capital Federal, se realizaron en abril de 1956 una movilización y una huelga contra el arresto de tres delegados por el interventor militar. Dirigió la huelga un comité integrado por militantes de base y al cabo de 6 días los delegados fueron puestos en libertad.⁵³

No todas las luchas tuvieron el mismo éxito, pero hacia mayo y junio de 1956 había cada vez más signos de la creciente confianza obrera y la mayor organización de comités semiclandestinos. Tanto en el frigorífico Swift de Rosario como en el de Berisso comités no oficiales organizaron huelgas también exitosas con motivo de los mismos problemas.⁵⁴ El comité no oficial que había organizado la huelga en la planta Lisandro de la Torre fue reconocido oficialmente por el interventor, en el mes de junio, como representante de los trabajadores. Por supuesto, no se trató de un proceso uniforme; mucho dependió del estado de organización sindical que se hubiera alcanzado en cada fábrica antes de la revolución de septiembre. Bajo Perón, los trabajadores de la carne habían sido uno de los gremios mejor organizados y más militantes. También representaban un sector decisivo de la economía. Era obvio que a trabajadores de sectores menos importantes y con menor tradición de organización militante les resultaría más difícil abordar la tarea de reorganizarse en gran proporción clandestinamente. Incluso en los frigoríficos la organización de esos comités fue en gran medida un proceso que se cumplió planta por planta. El caso fue que para mediados de 1956 esa corriente adquirió mayor impulso y que las autoridades militares designadas en la intervención de varios otros sindicatos les otorgaron un reconocimiento de hecho.⁵⁵

⁵⁰ *El Vitivinícola*, febrero de 1956.

⁵¹ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.

⁵² *Lucha Obrera*, 22 de diciembre de 1955.

⁵³ Entrevista con Sebastián Borro, Buenos Aires, enero de 1974.

⁵⁴ *Unidad Obrera*, junio de 1956.

⁵⁵ Véase en *La Vanguardia*, 17 de mayo de 1956, una enérgica denuncia de los socialistas contra esa tendencia.

Ese reconocimiento de los comités no oficiales significó, por parte de los militares, la admisión de que no habían acertado, en vista de la respuesta dada por las bases obreras, a eliminar efectivamente las comisiones internas o erradicar de ellas la influencia peronista. Una conclusión similar se derivó de las elecciones de delegados ante las comisiones que negociaban salarios. Esas elecciones empezaron en marzo de 1956, y a despecho de las maniobras efectuadas por los interventores con el fin de asegurar la presencia de mayorías antiperonistas, en la mayor parte de los sindicatos fueron elegidos delegados peronistas. En Alpargatas, la mayor planta textil del país, más de 12.000 obreros votaron por la lista peronista, en tanto que la lista socialista sólo recibió 400 sufragios.⁵⁶ Allí donde las maniobras de los interventores imposibilitaron la realización de comicios libres, los comités no oficiales organizaron abstenciones en gran escala y campañas de “voto en blanco”.

La tendencia demostrada por las elecciones para las comisiones salariales fue confirmada por las que se realizaron en agosto, setiembre y octubre para designar comisiones internas. La convocatoria misma a esos comicios fue por sí sola una admisión, por las autoridades, de que no habían podido, en vista del creciente número de comisiones no oficiales, imponer a representantes obreros designados por los militares. En octubre, la Cámara de Industrias del Calzado denunció ante el Ministerio de Trabajo que

“en la mayoría de las fábricas los dirigentes obreros vuelven a ser los mismos que en épocas que considerábamos superadas entorpecieron con sus actitudes el normal desenvolvimiento de las tareas. Todos los cargos caen en manos de indudables adictos del régimen depuesto”.⁵⁷

Esta confirmación del dominio de la clase trabajadora por los peronistas en el nivel de planta arraigaba en la lucha por defender conquistas inmediatas. En un importante sentido nunca se había dudado de esto, nunca se había registrado una oscilación de las opiniones por la cual hubiese podido pensarse que la lealtad al peronismo era jaqueada con éxito. Al describir la respuesta inicial de la clase trabajadora al golpe de setiembre de 1955, un obrero peronista, al que citamos en el capítulo anterior, había dicho que “defendimos instintivamente algo que sentíamos estar perdiendo”. El gobierno de Aramburu-Rojas inmediatamente dio un contenido concreto a ese “algo”. Los ataques a las comisiones internas, el “revanchismo-general” en los lugares de trabajo, la ofensiva contra las condiciones laborales, todo ello explicó muy clara e inmediatamente qué era lo que se perdía y señaló el contraste con la era peronista. La política del nuevo gobierno y de los empleadores reforzó directamente la identificación de Perón y el peronismo con esas experiencias concretas y cotidianas de los trabajadores. Lo cual también fue subrayado por la actitud de otros sectores que bregaban por conquistar la opinión de la clase obrera.

Socialistas y comunistas en la época de Aramburu

La posición de los socialistas era particularmente ambigua. Consideraban que la Revolución Libertadora tenía por fin restablecer la democracia y poner fin a la tiranía de Perón. En cuanto tal no era la revolución de una clase, sino que más bien representaba las aspiraciones unidas de todas las fuerzas democráticas. La prensa socialista recordaba con frecuencia a los empleadores y al gobierno que la revolución no se proponía enfrentar a la clase obrera y que los ataques contra los salarios y las condiciones de trabajo constituían una traición a sus propios ideales. Sin embargo, a la vez advertían que librada a sí misma la clase trabajadora continuaría, en su mayoría, siendo leal al peronismo. En vista de ello, era preciso reconocer la necesidad de limitar la actividad peronista, tanto políticamente como en los sindicatos. Esto condujo a los socialistas a adoptar una actitud ambivalente ante las medidas gubernamentales que afectaban a la clase obrera y los gremios. Por un lado, criticaron abiertamente a los militares por coligarse con los empleadores en el ataque a las condiciones y derechos básicos de los trabajadores. Por otro, también condenaban al gobierno cuando reconocía las comisiones de trabajadores de base, dominadas por los peronistas, que defendían aquellas condiciones y derechos. Tal como muchos otros demócratas declarados de aquel tiempo, los socialistas estaban atrapados en un círculo vicioso: en vista de que los trabajadores, contrariamente a lo esperado de ellos, no comprendían que se habían equivocado al apoyar a Perón, ahora resultaba claro que la aplicación de los principios democráticos confirmaría la lealtad de la clase trabajadora al peronismo, antítesis misma, según los socialistas, de la libertad y la democracia.

Más aún, los socialistas y otros militantes no peronistas no se avenían a aceptar las implicaciones de una experiencia de diez años de sindicalismo y de mejoramiento de los salarios y condiciones de trabajo con el respaldo del Estado. A juicio de todos ellos esto había significado una desviación del desarrollo saludable

⁵⁶ *Unidad Obrera*, junio de 1956.

⁵⁷ *Qué*, 9 de octubre de 1956.

del movimiento obrero, proceso donde trabajadores de insuficiente nivel intelectual habían sido descarriados por un demagogo corrupto. Las ventajas obtenidas, por lo tanto, estaban manchadas en un sentido moral por su nexa con un gobierno paternalista y democrático. En la práctica, esto condujo a que se asociara a los socialistas con la política del gobierno y los empleadores, circunstancia claramente simbolizada por las figuras de eminentes socialistas en la jefatura de sindicatos intervenidos.⁵⁸

Sin duda alguna, esto fue un problema particular de los dirigentes socialistas anteriores a 1946. Sin embargo, incluso los militantes de base se encontraban desconcertados cuando intentaban identificarse con las luchas obreras, elementales y en gran medida espontáneas, que tenían lugar en ese momento. Esos socialistas representaban una tradición diferente y otro concepto de actividad organizada de la clase trabajadora. Acerca de una huelga espontáneamente declarada por los conductores de ómnibus de Buenos Aires, un militante socialista deploró:

“Una huelga gremial se prepara y se decide; generalmente se anuncia con actos y declaraciones preliminares tendiendo a lograr con esa primera manifestación coactiva la finalidad que se persigue.”⁵⁹

Esta actitud les dejaba escaso terreno común con los peronistas que integraban las comisiones no oficiales.

Durante todo ese período el Partido Socialista observó oficialmente una actitud de superioridad moral, de queja y de admonición continua a la clase obrera por su incapacidad para comprender que sus verdaderos intereses se encontraban al margen del peronismo. Su política osciló entre refrendar en la práctica las medidas del gobierno militar y proclamar la necesidad de una regeneración moral y una reeducación de los trabajadores peronistas. Un editorial de *La Vanguardia* se lamentaba así:

“La auténtica masa obrera [...] no ha podido ser asistida moralmente por quienes tuvieron la virtud de mantenerse lejos de la contaminación demagógica y del bajo electoralismo. Aunque resulte difícil explicarlo esta masa obrera no ha podido todavía ser liberada de influencias tan regresivas como perniciosas.”⁶⁰

Si bien los comunistas compartían muchas de las mismas actitudes básicas frente al peronismo y su influencia sobre los trabajadores, en general adoptaron un enfoque más realista. Aunque tomaron parte en algunos de los ataques iniciales lanzados contra los sindicatos peronistas en setiembre, pronto adoptaron en las fábricas una línea de trabajo junto a los obreros peronistas en defensa de las condiciones laborales y la permanencia de los delegados gremiales. Esto significó para los comunistas el problema de que luchar junto con los peronistas esencialmente en el mismo terreno les dejaba prácticamente muy poco que les permitiera diferenciarse de ellos o que pudieran ofrecerles para atraerlos a sus propias filas. Si bien en ese tiempo trabajaron con los peronistas en muchos sindicatos y fueron aceptados por los peronistas de base como aliados en una forma en que muy pocos socialistas lo fueron, nunca hicieron peligrar el poder del peronismo sobre la mayoría de los obreros. Fuera del terreno de la lucha por un objetivo inmediato, el Partido Comunista como tal inspiraba fuertes recelos. En parte esto reflejó recuerdos del anterior antiperonismo del PC, y en parte sospechas sobre la estrategia general de ese partido en ese momento, en que pareció apuntar a lograr la aceptación del PC como fuerza esencial del campo “democrático”. Muchos obreros peronistas sospecharon que la línea dura adoptada por los comunistas en el campo gremial era negociable por una apertura que diera entrada al PC en el escenario político.⁶¹

Hacia fines de 1956 el gobierno había llegado a aceptar, con renuencia, que era imposible borrar tranquilamente el peronismo de los sindicatos por medio de decretos o simple represión. También se convenció de la falta de viabilidad de otros candidatos al liderazgo de la clase trabajadora. La política que emergió de esta visión consistió, en general, en mantener la línea dura y en una tentativa por disminuir el continuo dominio absoluto del peronismo en los gremios. Se adoptaron medidas para debilitar todo futuro movimiento sindical: garantizar la representación de la minoría, permitir que los trabajadores de cada industria fueran representados por más de un solo sindicato, otorgar a los organismos locales de la CGT autonomía respecto de la central obrera. Ante todo el gobierno de Aramburu intentó, en las elecciones sindicales que empezaron a efectuarse de octubre de 1956 en adelante, poner en manos de los antiperonistas

⁵⁸ Los ejemplos más prominentes fueron Ángel di Giorgio, interventor del sindicato de tranviarios, y Francisco Pérez Leirós, en el sindicato de trabajadores municipales.

⁵⁹ *La Vanguardia*, 31 de mayo de 1956.

⁶⁰ *La Vanguardia*, 16 de agosto de 1956.

⁶¹ En realidad el partido fue autorizado a participar en las elecciones de la asamblea constituyente, realizadas en julio de 1957. En ese tiempo hubo una notable declinación de su militancia sindical.

una porción significativa, aunque minoritaria, del movimiento gremial. Se estimó que con un grado suficiente de intervención del gobierno y manipulación por parte de los interventores militares en ese proceso electoral, el avance peronista en el movimiento obrero sería mantenido dentro de límites aceptables. Esa política tuvo escaso éxito. Los resultados de las primeras elecciones realizadas en octubre no hicieron más que confirmar la tendencia ya expresada en las elecciones de las comisiones internas y los delegados para las negociaciones salariales.⁶²

La lucha salarial durante el gobierno de Aramburu

La política de ingresos del gobierno de Aramburu se basó inicialmente en el supuesto de que la inflación resultante de la devaluación del peso, lo cual formó parte de la estrategia del nuevo régimen, no superaría el 10 por ciento. El aumento salarial concedido en febrero de 1956 se fundó en ese supuesto. Pero la devaluación, combinada con la relajación de los controles gubernamentales sobre los precios, llevaron la inflación muy por encima de esa cifra. Los empleadores apelaron a las nuevas circunstancias políticas para reajustar los márgenes de beneficio, que a juicio de ellos habían sido mantenidos durante años en bajo nivel por los controles del régimen peronista. En consecuencia las comisiones salariales, que habían empezado a reunirse a mediados de 1956, se encontraron con una intransigencia poco menos que absoluta por parte de los patrones. Los ofrecimientos de éstos consistían por lo general en porcentajes sobre las tasas de 1954 y su otorgamiento efectivo estaba casi siempre condicionado a la aceptación de cláusulas sobre racionalización. La mayoría de los trabajadores ya ganaban bastante más que los salarios básicos, de modo que los aumentos ofrecidos les significaron muy poco. El resultado consistió en crecientes conflictos que, en definitiva, fueron resueltos por el tribunal de arbitraje establecido por el decreto 2739.

Para los trabajadores los resultados fueron desparejos. En términos reales ganaban ciertamente muy poco; los salarios reales, que habían aumentado ligeramente en 1956, cayeron agudamente en 1957 al alcanzar la inflación una tasa del 25 por ciento.⁶³ De cualquier manera, durante ese período hubo una evidente redistribución de la renta que desfavoreció a la clase trabajadora, y puesto que en el mismo período no hubo mayores signos de que aumentara la inversión interna,

“existe una fuerte presunción de que el principal resultado de la distribución del ingreso en este periodo fue la reducción de la parte de los asalariados en beneficio de los más acomodados”.⁶⁴

La verdad es que el significado de la cuestión de los salarios bajo Aramburu residió más en la esfera de lo que se percibía y se pensaba que en la simple y directa cuestión del aumento o la caída de los salarios reales. A fin de cuentas, los salarios reales habían declinado también por momentos, bajo Perón, particularmente a principios de los años 1950-60. Lo que agregó después otro significado al problema fue la intensidad del antagonismo social y la animosidad existentes. Habitualmente las concesiones salariales eran arrancadas, al cabo de una áspera lucha, a un sector patronal reacio a otorgarlas. Cuando se producían huelgas prolongadas, el gobierno invariablemente intervenía para declararlas ilegales y tomar en sus manos la tarea de romperlas. El resentimiento resultante fue tanto mayor cuando la batalla de las huelgas se libró en un contexto general de crecimiento económico firme, aunque no fuese espectacular. Esto no sólo aguzó en la mayoría de los trabajadores la conciencia de la injusticia de la política salarial gubernamental: además puso de relieve el papel directo que desempeñaba el gobierno en el mantenimiento de un bajo nivel de vida. La declinación de los salarios reales y la insatisfactoria redistribución de la renta no eran efecto de una crisis económica general y una creciente desocupación. Las mismas estadísticas de huelgas testimoniaban la capacidad de los trabajadores para defender sus salarios en puros términos de mercado laboral. La declinación de los niveles de vida resultaba más bien de una derrota política, es decir la caída de Perón, antes que de circunstancias económicas adversas. Era el resultado directo del ataque gubernamental contra los sindicatos y de una congelación salarial respaldada por el gobierno. El gobierno y los empleadores imponían

⁶² Los peronistas triunfaron en los sindicatos industriales, y los libres en algunos gremios de empleados, como los de comercio. También los trabajadores del vestido eligieron una lista socialista, y los gráficos una encabezada por un sindicalista.

⁶³ CEPAL: *Economic Development and Income Distribution in Argentina*, Nueva York, 1969, pág. 254.

⁶⁴ R. Mallon y Juan Sourrouille: *Economic Policy Making in a Conflict Society*, Cambridge, Massachusetts, 1975, pág. 18. Hay versión castellana. Un autor calcula que la parte correspondiente a los salarios en la renta nacional bruta declinó del 49,5 por ciento en 1955 al 47,3 por ciento en 1957. Véase Clarence Zuvekas (h.): “Economic growth and income distribution in post-war Argentina”, *Inter-American Economic Affairs*, vol. 20, n° 3, 1966, págs. 19-39.

por medios legales y gracias al poder del Estado lo que no eran capaces de imponer mediante los mecanismos del mercado laboral.

Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el creciente movimiento de resistencia. La huelga más grave desde el punto de vista gubernamental, y en muchos sentidos un símbolo de la aspereza de las relaciones industriales en ese momento, fue el paro metalúrgico de fines de 1956. Desencadenada inicialmente por el ofrecimiento patronal de un aumento de sólo el 20 por ciento sobre los salarios básicos de 1954, la huelga duró más de seis semanas y se centró cada vez más en torno de la liberación de los trabajadores detenidos y la reincorporación de millares de despedidos. Durante la huelga, aviones y vehículos movilizadas por el gobierno distribuyeron volantes donde se exhortaba a los comerciantes de los suburbios obreros, como Avellaneda y Lanús, a no abrirles crédito a los huelguistas. Camiones con altoparlantes recorrieron esos barrios dando los nombres de los jefes huelguistas y exhortando a los trabajadores a volver a sus ocupaciones porque otros obreros lo estaban haciendo. Tanques y tropas patrullaron las calles: la policía entraba en bares y cafés elegidos al azar y expulsaba a los obreros metalúrgicos.⁶⁵ La mayor parte de las plantas fueron ocupadas por el ejército, que efectuaba ostentosas maniobras en las intermediaciones.

La huelga fue dirigida por comités de militantes de base que constituyeron una formidable estructura organizativa y manejaron el movimiento por medio de frecuentes reuniones entre delegados y bases, además de crear numerosas comisiones para movilizar el apoyo de la comunidad. Aunque la huelga no triunfó en lo relativo a reclamaciones salariales concretas, los trabajadores no la recordaron después como una derrota desmoralizante, ni tampoco la presentaron así las publicaciones gremiales de aquel momento. Más bien llegó a constituir un símbolo del orgullo de la clase obrera por su capacidad para organizarse y enfrentar a los empleadores y al Estado. A ese sentimiento de orgullo y solidaridad comunitaria se sumó una profunda amargura. Los obreros que dirigieron la huelga eran hombres buscados que vivían en la clandestinidad. Finalmente los huelguistas volvieron al trabajo al recibir una promesa de mejor pago, pero no de libertad para los detenidos ni garantías de reincorporación de los despedidos. Más aún, los despidos en masa continuaron en la industria metalúrgica a medida que los obreros reanudaban sus tareas. En algunas plantas fueron despedidos entre el 50 y el 70 por ciento. En la firma CAMEA, una de las principales de Buenos Aires, los empleadores pidieron que los obreros firmaran antes una petición de reincorporación; cuando se negaron, los 1300 que había en la planta fueron despedidos.⁶⁶

La huelga metalúrgica fue el peor ejemplo de intransigencia gubernamental y patronal que se dio en ese período, pero no el único. En el tramo final de 1956, las huelgas estalladas en las industrias de la construcción, el calzado, gráfica, textil, de la carne y de la construcción naval fueron declaradas igualmente ilegales y los huelguistas sometidos a un tratamiento similar. La ira ante la ferocidad de la represión y el orgullo por la resistencia obrera debían perdurar como parte decisiva de la cultura militante que nació en ese tiempo. Raimundo Villaflor, miembro del comité de metalúrgicos de Avellaneda, describió así, años después, la forma en que los 29 integrantes de ese comité fueron arrestados finalmente por la policía:

“Éramos veintinueve miembros del plenario cuando llegó la brigada con camiones, toda la patota [...] los estaban subiendo al camión policial. La gente se amontonaba y la policía dijo que eran ladrones, qué grande: una banda de 29 ladrones. Entonces ellos gritaban: '¡No somos ladrones, somos obreros!' Pero igual los llevaron.”⁶⁷

Bajo Perón los trabajadores habían padecido los efectos de la inflación y soportado tiempos difíciles pero rara vez habían sido cazados y tratados como ladrones.

⁶⁵ Entrevista con Ernesto González, Buenos Aires, febrero de 1974.

⁶⁶ Volante en poder del autor, sin fecha, pero publicado por grupos de base a principios de enero de 1957. Una información publicada por *La Vanguardia* el 3 de enero de 1957 confirmó la noticia del incidente.

⁶⁷ Rodolfo Walsh: *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, 1969, pág. 19.

BIBLIOGRAFÍA

Diarios, periódicos y revistas

Las fechas se refieren en general a los años consultados y no son sinónimos de todo el tiempo durante el cual aparecieron las publicaciones en cuestión. La mayor parte de la prensa peronista publicada en el período 1955-59 se editó, en el mejor de los casos, en condiciones semiclandestinas, es decir, con muchas restricciones. De allí que la publicación fuese esporádica y no alcanzara a veces más que una o dos ediciones.

- Argentina en Marcha*, 1960, semanario frondicista.
Así, 1970, revista semanal.
Avanzada Socialista, 1972-74, semanario del partido Socialista de los Trabajadores.
Azul y Blanco, 1956-58, semanario nacionalista y antiaramburista.
La Causa Peronista, 1974, semanario de JP/Montoneros.
Che, 1961, semanario del partido Socialista de Vanguardia.
Clarín, diario nacional.
Compañero, 1963, peronista independiente de línea dura.
Crisol del Litoral, 1955, hoja informativa independiente, pro peronista, editada por activistas de base de Puerto General San Martín, Santa Fe.
Crítica, diario nacional.
El Cuarenta, 1957, hoja informativa independiente, pro peronista, de la zona rosarina.
Cuestionario, 1974, revista semanal.
La Democracia, 1960, diario frondicista.
El Descamisado, 1973-74, semanario de JP/Montoneros.
Descartes, 1962, semanario peronista controlado por las 62 Organizaciones.
En Lucha, órgano del Movimiento Revolucionario 17 de octubre, 1974, peronista revolucionario.
Frente Obrero, 1956, peronista.
Intersindical, 1972, pro comunista.
Juancito, 1957, hoja informativa barrial, peronista, de Rosario.
Justicialismo, 1963, semanario peronista, pro 62 Organizaciones.
Línea Dura, 1958, semanario peronista semioficial, dirigido por John William Cooke.
Lucha Obrera, 1955, trotskista/peronista.
Mayoría, 1957-59, semanario pro frondicista.
Militancia, 1973-74, pro peronista revolucionario.
La Nación, diario nacional.
The New York Times, diario estadounidense.
Noticias Gráficas, 1955-62, diario nacional.
Nuestro Pueblo, 1959-60, semanario pro frondicista.
Nueva Era, 1955-58, periódico mensual del Partido Comunista argentino.
Nuevo Hombre, 1971, semanario pro guerrillero conectado con la izquierda católica.
Palabra Argentina, 1955-59, semanario pro peronista.
Palabra Obrera, 1958-63, trotskista, pro peronista.
“Peronismo: el exilio, 1955-73”, *Cuadernos de Marcha*, n° 71, 1973, número especial.
El Popular, 1963-64, semanario pro comunista.
Primera Plana: historia del peronismo, 1965-66.
Pueblo Unido, 1959, semanario peronista.
Qué pasó en siete días (Qué), 1955-59, revista semanal pro frondicista.
La Razón, diario nacional.
Review of the River Plate, revista semanal.
Siete Días, 1973, revista semanal.
El Soberano, 1959, grupos clandestinos.
Unidad Obrera, 1956, trotskista, pro peronista.

La Vanguardia, 1955-57, diario del Partido Socialista.
La Verdad, 1955-56, trotskista, pro peronista.
¡Ya!, 1973, pro Juventud Peronista.

Materiales sindicales

Agrupación Obrera, “Obreros Argentinos”, volante de las bases, sin fecha, archivo del autor.
Agrupamiento Sindical Argentino, volante sin título ni fecha, archivo del autor.
El Alpargatero, 1960. periódico de las bases, planta textil de Alpargatas, Barracas, Buenos Aires.
AOT, 1955-66. periódico de la Asociación Obrera Textil.
Boletín de Huelga, diciembre de 1956, Unión Obrera Metalúrgica.
Confederación General del Trabajo, *Boletín Informativo Semanal*, 1963-66, dirigido por Luis Angeleri.
CGT, 1955, periódico de la CGT bajo el régimen peronista. Tres números aparecidos en setiembre/octubre de 1955.
El porqué de la Semana de Protesta, mayo de 1963, folleto.
La CGT convoca al pueblo a Cabildo Abierto, tercera etapa del Plan de Lucha, julio de 1964, folleto.
La CGT y el Plan de Lucha, cuarta etapa, noviembre de 1964, folleto.
Ocupación por 3.913.000 trabajadores de 11.000 establecimientos, junio de 1964, folleto.
La CGT en marcha hacía un cambio de estructuras, enero de 1965. folleto.
Curso de capacitación sindical, 25 de noviembre de 1966, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).
Dinamis, 1965-66, revista del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza.
Documentación e Información Laboral, 1960-66, boletín mensual de temas gremiales, dirigido por Leonardo Dimase.
Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones, diciembre de 1959.
Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones, 20 de mayo de 1960.
Estatuto de la Asociación Obrera Textil, 14 de diciembre de 1966.
Estatuto del Sindicato Unido de Petroleros del Estado, 1965.
Memoria y Balance, XI Congreso Nacional de la AOT, 22, 23 y 24 de marzo de 1968.
El Obrero Ferroviario, 1955, periódico de la Unión Ferroviaria.
Pautas para una política nacional. Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza, 1970.
Petróleo Argentino, 1960-66, periódico de la Federación de Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado (SUPE).
El Trabajador de la Carne, 1958-60, periódico de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne.
El Vitivinícola, 1957, periódico de la Unión Obrera Vitivinícola.

Fuentes gubernamentales

Banco Central de la Nación, Origen del producto y distribución del ingreso, 1950-1969, suplemento del boletín estadístico, n° 1, enero de 1971.
CGE - Consejo Federal de Inversiones, programa conjunto, vol. 3, 1964.
Consejo Nacional de Desarrollo, Plan nacional de desarrollo, Buenos Aires, 1970.
Ministerio de Trabajo y Previsión: *Nuevo régimen de remuneraciones y de las convenciones colectivas de trabajo*, Buenos Aires, 1956. Laudo del tribunal arbitral, n° 63/1956, Buenos Aires, 1956.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: *Conflictos de trabajo*, Buenos Aires, 1961.
Convención colectiva de la industria textil, n° 155/1960, Buenos Aires, 1960.
Convención colectiva de la industria metalúrgica, n° 55/1960, Buenos Aires, 1960.
Censo nacional de asociaciones profesionales, Buenos Aires, 1965.

Ministerio de Trabajo: *Asociaciones profesionales de trabajadores*, ley 14.255, decretos 969/66 y 2477/70, Buenos Aires, 1970
“Informe sobre las actas del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social”, Buenos Aires, marzo de 1955, Hechos e Ideas, 1955.
Servicio Internacional de Publicaciones Argentinas, “Emancipation of the Workers”, Buenos Aires, 1953.

Entrevistas

Herminio Alonso, Buenos Aires, diciembre de 1976.
Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.
Alberto Bordaberry, Buenos Aires, octubre de 1977.
Sebastián Borro, Buenos Aires, febrero de 1974.
Tito Dragovitch, Buenos Aires, setiembre de 1976.
Lautaro Ferlini, Buenos Aires, noviembre/diciembre de 1976.
Ramiro González, Rosario, noviembre de 1976.
Ernesto González, Buenos Aires, febrero de 1974.
Hopen, Buenos Aires, marzo de 1974.
Enrique Micó, Buenos Aires, febrero de 1974.
Jorge Di Pascuale, Buenos Aires, febrero de 1974.

Fuentes secundarias: libros, artículos, folletos

Allen, V. L.: *Militant trade unionism*, Londres, 1971.
Bourdieu, Pierre: *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, 1977.
Braun, Oscar: *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, 1973.
Brid, Juan Carlos: “Quince años de resistencia”, *Nuevo Hombre*, 8 de agosto de 1971. 12 de septiembre de 1971.
Cabo, Dardo, y Roa, Ricardo: “Duros y negociadores en el movimiento peronista”, *Nuevo Hombre*, 15 de setiembre de 1971.
Cantón, Darío: *Elecciones y partidos políticos en la Argentina*, Buenos Aires, 1973.
—: *El parlamento argentino en épocas de cambio*, 1890. 1916 y 1946, Buenos Aires, 1966.
Carri, Roberto: *Sindicatos y poder en la Argentina*, Buenos Aires, 1967. “La Resistencia peronista: crónica por los resistentes”, *Antropología del Tercer Mundo*, junio de 1972.
Chauí, Marilena: *Cultura e democracia, o discurso competente e outras falas*, San Pablo, 1982.
Cimazo, Jacinto, y Grunfeld, José: *Luis Danussi en el movimiento social y obrero argentino*, Buenos Aires, 1976.
Ciria, Alberto: *Parties and Power in Modern Argentina, 1930-1946*, Albany, 1969.
Colom, Eduardo: *El 17 de octubre, la revolución de los descamisados*, Buenos Aires, 1946.
Cooke, John William: “Peronismo y lucha de clases”, *Cristianismo y Revolución*, octubre/noviembre de 1966.
Correa, Jorge: *Los jerarcas sindicales*, Buenos Aires, 1972.
—: “Crónica por un resistente: crónicas de la Resistencia”, *Antropología del Tercer Mundo*, agosto de 1972.
Delich, Francisco: *Crisis y protesta social: Córdoba, mayo 1969*, Buenos Aires, 1970.
Díaz, Hamilton Alberto: *Curso de guerra contrarrevolucionaria: lucha contra el terrorismo*, Servicio de Información del Ejército, Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, 19 de octubre de 1961.
Doyon, Louise: “El crecimiento sindical bajo el peronismo”, *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 57, 1975, págs. 151-61.
—: “Conflictos obreros durante el régimen peronista, 1946-1955”, *Desarrollo Económico*, vol. 17, no 67, 1977, págs. 437-73.
Economic Commission for Latin America (CEPAL): *Economic Development and Income Distribution in Argentina*, Nueva York, 1969.

- Evans, Judith:** “Tango and popular culture in Buenos Aires”, trabajo presentado ante la conferencia de la American Historical Association, Washington, 1980.
- Evans, Judith, y James, Daniel:** “Reflections on Argentine automobile Workers and their history”, en Richard Kronish y Kermeth Mericle, comps.: *The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry*, Cambridge, Massachusetts, 1984.
- Fayt, Carlos:** *La naturaleza del peronismo*, Buenos Aires, 1967.
- Franco, Luis:** *Biografía patria*, Buenos Aires, 1958.
- Frigerio, Rogelio:** *Los cuatro años*, Buenos Aires, 1962.
—: *Introducción a los problemas nacionales*, Buenos Aires, 1965.
- Fronzizi, Arturo:** *Petróleo y política*, 3ª ed., Buenos Aires, 1960. *Política económica nacional*, Buenos Aires, 1963.
- Gálvez, Manuel:** *En el mundo de los seres reales*, Buenos Aires, 1955.
- García, Miguel Ángel:** *Peronismo: desarrollo económico y lucha de clases en Argentina*, Llobregat, 1979.
- Gazzera, Miguel:** “Nosotros los dirigentes”, en Norberto Ceresole y Miguel Gazzera: *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, 1970.
- Germani, Gino:** *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, 1962.
—: “El rol de los obreros y de los migrantes internos en los orígenes del peronismo”, *Desarrollo Económico*, vol. 13. n° 51. 1973, págs. 435-88.
- Gèze, François y Labrousse, Alain:** *Argentine: révolution et contre-révolution*, París, 1975.
- Gobello, José:** *Diccionario lunfardo y otros términos antiguos y modernos usados en Buenos Aires*, Buenos Aires, 1975.
- Goldar, Ernesto:** “La literatura peronista”, en Gonzalo Cárdenas y otros: *El peronismo*, Buenos Aires, 1969.
- Gouldner, Alvin:** “Metaphysical pathos and the theory of bureaucracy”, en L. A. Coser y B. Rosenburg. comps.: *Sociological Theory*, Nueva York, 1964.
- Halperin Donghi, Tulio:** “Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los migrantes internos”, *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 56, 1975. págs. 765-81.
- Hyman, Richard:** *Marxism and the Sociology of Trade Unionism*, Londres, 1972.
- Imaz, José Luis de:** *Los que mandan*, Albany, 1976.
- Iscaro, Rubens:** *Historia del Movimiento Sindical*, vol. 1, Buenos Aires, 1974.
- Jelin, Elizabeth:** “Los conflictos laborales en Argentina. 1973-1976”, CEDES, Estudios Sociales, n° 9, Buenos Aires, 1977.
- Laclau, Ernesto:** *Politics and Ideology in Marxist theory*, Londres, 1977.
- Lefort, Claude:** *¿Qué es la burocracia?*, París, 1970.
- Little, Walter:** “Political integration in Peronist Argentina”, tesis de doctorado, Universidad de Cambridge, 1971.
—: “La organización obrera y el Estado peronista”, *Desarrollo Económico*, vol. 19. no 75, 1979, págs. 331-76.
- Llach, Juan José:** “El Plan Pinedo de 1940: su significación histórica y los orígenes de la economía política del Peronismo”, *Desarrollo Económico*, vol. 23, no 92, 1984, págs. 515-58.
- Luna, Félix:** *El 45: crónica de un año decisivo*, Buenos Aires, 1969.
—: *Alvear*, Buenos Aires, 1958.
- Mafud, Julio:** *Sociología del Peronismo*, Buenos Aires, 1972.
—: *La vida obrera en la Argentina*, Buenos Aires, 1976.
- Mallon, Richard y Sourrouille, Juan:** *Economic Policy Making in a Conflict Society*, Cambridge, Massachusetts, 1975.
- Matsushita, Hiroshi:** *El movimiento obrero argentino, 1930-1945: sus proyecciones en los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, 1983.
- Michels, Robert:** *Political Parties*, Glencoe, 1958.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos:** “El movimiento obrero en los orígenes del peronismo”, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, vol. I, Buenos Aires, 1972.
—: “Crecimiento industrial y alianzas de clase en la Argentina, 1930-40”, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, vol. 1, Buenos Aires, 1972.

- O'Donnell, Guillermo:** *Un juego imposible: competiciones y coaliciones entre partidos políticos en la Argentina, 1955-1966*, Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, 1972.
- Pelletieri, Osvaldo:** *Enrique Santos Discépolo: obra poética*, Buenos Aires, 1976.
- Peña, Milcíades:** *El peronismo: selección de documentos para su historia*, Buenos Aires, 1973.
- Peralta Ramos, Mónica:** *Etapas de acumulación y alianzas de clase en la Argentina, 1930-70*, Buenos Aires, 1972.
- Perelman, Ángel:** *Cómo hicimos el 17 de octubre*, Buenos Aires, 1961.
- Perón, Juan Domingo:** *La fuerza es el derecho de las bestias*, Montevideo, 1957.
- : Carta a las 62 Organizaciones, 25 de junio de 1960, publicada como folleto por las 62 Organizaciones.
- : Entrevista con Enrique Pavón Pereyra, 1968, publicada en *Siete Días*, n° 312, 1973.
- : Carta a Antonio Caparrós, julio de 1969.
- Perón-Cooke,** *Correspondencia*, 2 volúmenes, Buenos Aires, 1972.
- Prieto, Ramón:** *El Pacto*, Buenos Aires, 1965.
- Real, Juan José:** *30 años de historia argentina*, Buenos Aires, 1962.
- Reyes, Cipriano:** *Cómo yo hice el 17 de octubre*, Buenos Aires, 1973.
- Rock, David:** *Politics in Argentina: the rise and fall of Radicalism, 1890-1930*, Cambridge, 1975.
- Roldán, I. M.:** *Sindicatos y protesta social en la Argentina: un estudio de caso, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 1969-1974*, Amsterdam, 1978.
- Rotondaro, Rubén:** *Realidad y cambio en el sindicalismo*, Buenos Aires, 1972.
- Roxborough, Ian:** "Unity and diversity in Latin American history", *Journal of Latin American History*, vol. 16, parte 1, 1984, págs. 1-26.
- Sartre, Jean-Paul:** *Critique of Dialectical Reason*, vol. I, Londres, 1976.
- : *The Communists and Peace*, Londres, 1969.
- Senén González, Santiago y Torre, Juan Carlos:** *Ejército y sindicatos*, Buenos Aires, 1969.
- Stedman Jones, Gareth:** *Languages of Class: studies in English working class history*, Cambridge, 1984.
- Tamarin, David:** *The Argentine Labor Movement, 1930-1945: a study in the origins of Peronism*, Albuquerque, 1985.
- Torre, Juan Carlos:** *El proceso político interno de los sindicatos argentinos*, Instituto Torcuato Di Tella, Documento de Trabajo n° 89, Buenos Aires, 1974.
- : *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, 1983.
- Vigo, Juan M.:** *La vida por Perón: crónicas de la Resistencia*, Buenos Aires, 1973.
- Viñas, Ismael:** *Orden y progreso: análisis del frondisismo*, Buenos Aires, 1960.
- Walsh, Rodolfo:** *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, 1969.
- Williams, Raymond:** *Marxism and Literature*, Oxford, 1977.
- Wright Mills, C.:** *The New Men of Power*, Nueva York, 1948.
- Zuvekas (h.), Clarence:** "Economic growth and income distribution in post-war Argentina", *Inter American Economic Affairs*, vol. 20, n° 3, 1966. págs. 19-39.
- : "Argentine economic policy, 1958-1962: the Frondizi government's development plan", *Inter-American Economic Affairs*, vol. 22, n° 1, págs. 45-75.